MEMORIA RELATIVA A LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR EL CONSEJO
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA
DURANTE EL AÑO 2014.

ÍNDICE.

1. Reclamaciones interpuestas y resoluciones dictadas.....	3-7
1.1.Estado de las reclamaciones y resoluciones.....	3
1.2. Detalle de las resoluciones.....	3
1.3. Estado de las reclamaciones pendientes.....	4
1.4. Detalle de las resoluciones.....	5
1.5. Desglose por asuntos y conceptos.....	5-7
2. Otros trabajos relacionados con la resolución de reclamaciones.....	7
3. Informes.....	7
4. Proyección exterior.....	8
5. Anexo: Sinopsis de reclamaciones resueltas.....	9-77

1- RECLAMACIONES INTERPUESTAS Y RESOLUCIONES DICTADAS.

1.1. ESTADO DE LAS RECLAMACIONES Y RESOLUCIONES.

RECLAMACIONES.

REAS INTERPUESTAS EN 2014.....		147.
PENDIENTES DE RESOLVER DE OTROS AÑOS.....		92.
De 2012...	3.	
De 2013...	89.	
PENDIENTES DE RESOLVER A 31 DE DICIEMBRE DE 2014....		69.
De 2013...	1.	
De 2014...	68.	
En trámite previo al traslado al ponente...	26.	
Trasladadas al ponente para resolución...	43.	

RESOLUCIONES.

TOTALES.

RESOLUCIONES DICTADAS.....		147.
<u>Estimatorias...</u>	66.	
<u>Parcialmente estimatorias...</u>	7.	
<u>Desestimatorias...</u>	51.	
<u>De inadmisión...</u>	18.	
Por falta de competencia...	5.	
Por extemporaneidad...	13.	
<u>De rectificación de errores materiales...</u>	1.	
<u>En pieza separada sobre terceros , (estimatoria)</u>	1.	
De suspensión, (estimatorias)...	3.	
 <u>ACUERDOS DE ARCHIVO SIN RESOLUCIÓN</u>		5.
Por satisfacción extraprocesal...	5.	
Por desistimiento...	0.	

1.2. DETALLE DE LAS RESOLUCIONES.

En el año 2014 se han interpuesto 147 reclamaciones; este número coincide con el de las resoluciones dictadas. Las reclamaciones pendientes de resolver a 1 de enero de 2014 eran 92; dado que en algunas ocasiones se resuelven asuntos acumulados el Consejo ha reducido la carga a trasladar de un año a otro, de forma que las reclamaciones pendientes de resolver a 31 de diciembre de 2014 han sido 69.

El número de resoluciones total o parcialmente estimatorias es de 74, lo que supone el 50% de las resoluciones dictadas, cifra muy elevada si se compara con las medias de otros años, que suelen estar cerca del 30%. Por lo que respecta a la proporción con respecto a las reclamaciones resueltas, (las pendientes de resolución al inicio del año, más las registradas en el año, menos las pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2014: 170), la proporción es del 42,9%

Las inadmisiones a trámite suponen el 10% de la carga de trabajo resuelta en el año.

Por lo que respecta a los plazos de resolución, en las reclamaciones que en 2014 se resolvieron y habían sido interpuestas en años anteriores la media ha sido de 247,8 días desde la interposición; en las resoluciones de reclamaciones interpuestas en el propio 2014, 107,1 días. La media teniendo en cuenta todas las reclamaciones y resoluciones ha sido de 181,6 días, (5,9 meses). Esto quiere decir que el Consejo está resolviendo las cuestiones que se le plantean en una media de tiempo inferior a seis meses. Con respecto a esta cuestión cabe hacer, de nuevo, el mismo comentario que en otros años: la complejidad y el grado de elaboración jurídica que se están observando en muchas reclamaciones, así como la complejidad de los expedientes, hace que aproximarse a los tres meses de plazo medio de resolución, (el dispuesto como de silencio administrativo en Cartagena), sea una tarea prácticamente imposible. De hecho, y como se viene comentando, lo normal en este tipo de procedimientos, tanto en la Administración General del Estado como en la de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que disponen de órganos equivalentes al Consejo, es un plazo de silencio administrativo de un año, (con alguna excepción que lo fija en 6 meses prorrogables). La velocidad de resolución de los órganos equivalentes al Consejo teniendo en cuenta la media de toda España es de 21,5 meses, (656 días). De acuerdo con los datos anteriores, y sin que esto suponga renunciar a intentar rebajar los tiempos de resolución en la medida de lo posible, cabe concluir en que el Consejo da respuesta a las cuestiones que se le plantean en un plazo de tiempo inusualmente rápido.

1.3.- DESGLOSE POR ASUNTOS Y CONCEPTOS.

Como es habitual desde su constitución el Consejo hace públicos este año, en un anexo a esta Memoria, los extractos de cada una de sus resoluciones, que vienen ordenados según un sumario analítico. Con independencia de lo anterior algunas de las cuestiones más relevantes de entre las suscitadas en 2014 son las que a continuación se exponen.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Por lo que respecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Consejo ha estimado que en los casos de desfase entre la realidad material y la catastral, debidos a errores materiales, aritméticos o de hecho, los efectos de la subsanación se deben de retrotraer al momento acreditado en que los hechos discrepaban de la información catastral. Lo anterior sobre la base de la interpretación dada a esta cuestión por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia 1324/2011, de 19 de diciembre, que se basa en la Circular del Director General del Catastro 05.03/2006, de 27 de abril, según la cual el procedimiento de subsanación de discrepancias procede en los casos de error de derecho, pero en los de error de hecho procede el de rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho regulado en la Ley General Tributaria. También, por la decisión asumida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 1047/2012, de 13 de octubre, que admite la retroactividad de los actos administrativos en los supuestos en los que se anule un acto, el presupuesto de hecho existiera ya en el momento al que la retroactividad alcanza y no se produzcan perjuicios a terceros.

Ha estimado la procedencia de exención en el caso de una residencia militar que tiene como fin primordial proporcionar alojamiento logístico a las unidades, centros y organismos de la ciudad. Esto sin perjuicio de que pueda prestar servicios de alojamiento y otros servicios complementarios a los miembros de las fuerzas armadas y familiares.

Con respecto a la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de ciertas instalaciones sanitarias, el Consejo ha entendido, de acuerdo con jurisprudencia pacífica y numerosa, que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que las ordenanzas municipales pueden establecer una exención a favor de los bienes inmuebles de los que sean titulares los centros de sanitarios de titularidad pública, siempre que estén directamente afectos a los fines específicos, pero dicha exención no se constituye si no la establece una ordenanza.

Se ha planteado, con relación a la bonificación en el Impuesto por familia numerosa, el caso de que existan dos cabezas de familia: la ex esposa, que no solicita bonificación para su

vivienda por no tener la condición de familia numerosa, y el ex esposo, padre de tres hijos, que sí la solicita para su vivienda. De acuerdo con la finalidad de la bonificación, el Consejo ha estimado que procede la aplicación de ésta.

Por lo que respecta a dicha bonificación por familia numerosa se han planteado cuestiones relacionadas con los requisitos relativos a la existencia de deudas tributarias pendientes a la fecha del devengo del impuesto. El Consejo ha estimado que tal y como dispone la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Cartagena, la aplicación de la bonificación requerirá que el sujeto pasivo se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Cartagena. En este sentido, y conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley General Tributaria, es la fecha del devengo de cada tributo la que determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria principal, salvo que la Ley de cada tributo disponga otra cosa. A efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, será en consecuencia el día 1 de enero la fecha de referencia para revisar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos contemplados en la normativa para el nacimiento de la obligación tributaria y, en consecuencia, de sus elementos configuradores de carácter positivo o negativo.

Determinadas resoluciones han tratado la cuestión relativa a la posibilidad de practicar liquidaciones tributarias individuales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando existen varios obligados tributarios. La cuestión ha sido resuelta en sentido estimatorio para el contribuyente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.7 de la Ley General Tributaria, que dispone que la concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa; además, en la jurisprudencia existente y en la doctrina de los órganos consultivos de la Hacienda Pública, que interpretan que dicha cotitularidad y concurrencia en el hecho imponible se produce siempre que no se haya constituido una comunidad de bienes formalmente o exista otro tipo de ente del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

El Consejo, en aplicación de la jurisprudencia sobre la cuestión, y en relación con la exención de los vehículos a nombre de minusválidos, ha resuelto que cuando la Ordenanza prevé la necesidad de aportar certificado de minusvalía del IMAS, el Ayuntamiento puede efectivamente exigir dicho certificado como medida para la acreditación de la condición, de forma que no puede ser sustituido por otra acreditación, (incapacidad o inutilidad), dado que los conceptos de invalidez

por un lado e incapacidad o inutilidad para el servicio, por otro, reflejan realidades diferentes.

TASAS.

En relación con el devengo de la Tasa por Prestación del Servicio de Retirada de Vehículos de la Vía Pública ha manifestado, siguiendo la línea ya establecida en el pasado, que el devengo de la tasa es independiente de la infracción, de forma que puede existir infracción sin devengo u obligación de pago de la tasa. Así mismo, que la exigencia de la tasa se debe de basar, entre otros extremos, en la existencia de una señalización correcta y clara, en la concurrencia de circunstancias de gravedad, obstaculización grave, peligro o daño demostrados y en la complitud y coherencia del expediente, que ha de poner de manifiesto, no ya las circunstancias de la infracción, relevantes a los efectos del expediente sancionador, sino las que ocasionan los presupuestos de obstaculización grave o peligrosa que legitiman la retirada del vehículo.

2.-OTROS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES.

El Consejo ha seguido elaborando la sinopsis de las resoluciones que emite, clasificándolas según un índice analítico. Estos resúmenes se acompañan a la Memoria, para su publicación en la página web del Ayuntamiento. Se sigue llevando a cabo la tarea de estandarización de criterios de clasificación, y se sigue procurando que los resúmenes de las resoluciones sean lo más amplios posible, con el fin de facilitar el acceso a los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de resolver.

3- INFORMES.

En sus reuniones de los días 17 y 20 de octubre y 4 de diciembre, el Consejo informó sobre propuestas del texto de Ordenanzas Fiscales del Excelentísimo Ayuntamiento. El informe tiene carácter puramente técnico o de legalidad, y no implica la asunción de posturas concretas ante cuestiones jurídicas implícitas.

4.- PROYECCIÓN EXTERIOR.

En 2014 la reunión de Órganos Municipales para la Resolución de Reclamaciones Económico Administrativas de España se llevó a cabo en Bilbao, los días 12 y 13 de abril. Se analizaron cuestiones relacionadas con la incidencia de las formas de resolución de recursos en la litigiosidad judicial, las novedades jurisprudenciales en la determinación de la base imponible en el Impuesto sobre Plusvalía, las incidencias de las actuaciones catastrales en la prescripción de los tributos cuya gestión se basa en la información catastral, las notificaciones en domicilio desconocido o la liquidación y recaudación de ingresos de derecho público entre Administraciones.

Como viene siendo habitual se hizo el seguimiento estadístico anual del funcionamiento de estos órganos a nivel nacional.

5. **ANEXO: SINOPSIS DE RECLAMACIONES RESUELTAS.**

IBI

OBLIGADO TRIBUTARIO.

Nº REA: 11/2013

Nº RESOLUCIÓN: 13/2014.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: OBLIGADO TRIBUTARIO (COMPETENCIA).

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El IBI es un impuesto de gestión compartida entre el Estado y el Ente Local. A este último le corresponde la competencia en materia de liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, correspondiéndole al Estado, la gestión censal y la revisión de la misma. Tal y como indica el artículo 77 del TRLHL, el IBI se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sirviendo ésta como base para practicar las oportunas liquidaciones.

Nº REA: VARIAS.

Nº RESOLUCIÓN: VARIAS.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: OBLIGADO TRIBUTARIO (SOLIDARIDAD DE CONTRIBUYENTES).

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Tal y como establece el artículo 35.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa. Añade que, cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho transmitido.

Nº REA: 39/2013

Nº RESOLUCIÓN: 43/2014.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: OBLIGADO TRIBUTARIO (DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD).

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 64.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible del IBI, los bienes inmuebles, objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. Establece pues el precepto indicado, una garantía real para el cobro del tributo, afectando los bienes sobre los que recae el gravamen al pago de éste. De acuerdo con ello, y tal y como indica el precepto, los bienes inmuebles adquiridos "por cualquier causa", quedan sujetos al pago del impuesto, tal y como ha ocurrido en el presente supuesto, aunque la adquisición se haya producido por adjudicación judicial. Cabe recordar conforme al artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que nos encontramos ante un supuesto de garantía del cobro de un tributo a través de la afección de bienes al pago del impuesto.

Nº REA: 55/2013 ; 56/2013.

Nº RESOLUCIÓN: 76/2014.

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: OBLIGADO TRIBUTARIO. OTROS (DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD).

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El proceso de derivación de responsabilidad por afección de bienes al pago del IBI, de acuerdo con el artículo 79.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), se requiere la declaración de responsabilidad subsidiaria, tal y como establece el artículo 67 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en los términos establecidos en los artículos 174 y 176 de la LGT.

Dispone el artículo 174 referido, en su apartado 2, que en el supuesto de liquidaciones administrativas, si la declaración de responsabilidad se efectúa con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, la competencia para dictar el acto administrativo de declaración de responsabilidad corresponde al órgano competente para dictar la liquidación. En los demás casos, dicha competencia corresponde al órgano de recaudación. A continuación, indica el apartado 3, que se ha de iniciar el trámite de audiencia previo a los responsables, lo que no excluye el derecho que les asiste a formular con anterioridad a dicho trámite las alegaciones que estimen pertinentes y a aportar la documentación que consideren necesaria. Y en su apartado 4 continua señalando que el acto de declaración de responsabilidad ha de ser notificado a los responsables. Dicho acto de notificación ha de tener el siguiente contenido: a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto; b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos; y, c) Lugar, plazo y forma

en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable. Finalmente establece el apartado 5 que en el posible recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad puede impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación.

Nº REA: 129/2014

Nº RESOLUCIÓN: 142/2014

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: OBLIGADO TRIBUTARIO

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El artículo 63.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante LHL), en concordancia con el 61.1.d), establece como sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a quien ostente la titularidad del derecho de propiedad sobre el inmueble.

El artículo 75.1 LHL establece que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo, y que este coincide con el año natural, es decir, el 1 de Enero de cada año. Así pues, resulta obligado al pago del Impuesto quien resulte propietario del inmueble a la fecha del devengo.

HECHO IMPONIBLE.

Nº REA: 125/2013

Nº RESOLUCIÓN: 41/2014.

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE. EXENCIÓN.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El sentido de la Resolución de la reclamación /20**, y las mismas razones que fundamentaron dicha resolución estimatoria con respecto a la referencia catastral cuyo impuesto se analiza, fundamentan la estimación de la presente reclamación.

El Consejo no es competente para declarar la exención permanente del bien a que se refiere la reclamación.

EXENCIONES.

Nº REA: 76,92,93,94 y 95/2013.

Nº RESOLUCIÓN: 18/2014.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: EXENCIÓN. AFECTACIÓN A LA DEFENSA NACIONAL.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Reclamación **/2***.

Procede la estimación de la reclamación **/2*** en lo que respecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de todas las referencias catastrales a cuyo lado se hace constar la referencia de Resoluciones de este Consejo, o el acuerdo de ejecución de sentencia que en el Fundamento Primero se menciona. En el caso de Resoluciones de este Consejo, sobre la base de los mismos fundamentos jurídicos.

Otras referencias catastrales.

Con independencia de que las referencias puramente genéricas de la, y la ausencia de una concordancia que permita relacionar éstas con fincas o referencias catastrales concretas, en ocasiones ha dificultado y hecho extraordinariamente farragosa la labor de este Consejo, la ubicación y naturaleza de las referencias catastrales que se mencionan en este Fundamento avalan su consideración como, por lo menos en la medida en que se puedan considerar incluidas en la y, algunas de ellas, en tanto no se acredite su estado de desuso.

La consideración de afectación de todas las referencias catastrales, así como el acuerdo de ejecución de sentencia que afecta a la reclamación **/2***, hacen que se consideren indebidamente girados los recibos a los que hacen referencia las reclamaciones **, **, ** y **.

Nº REA: 130/2013 y 104/2014

Nº RESOLUCIÓN: 19/2014 y 146/2014.

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: EXENCIÓN.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El reclamante manifiesta que el inmueble cumple una finalidad primordial consistente en prestar apoyo a la movilidad geográfica del personal militar destinado en plaza, tal y como dispone la Orden Ministerial 13/2006, de 26 de marzo. Por tanto, cumple un requisito determinante para la exención del IBI, cual es el desarrollo de actividades propias y típicas de la defensa nacional, no existiendo finalidad económica, comercial, deportiva, social, lúdica o de recreo. En sus alegaciones manifiesta que el objetivo principal de las residencias logísticas militares es el de proporcionar alojamiento y otros servicios complementarios a los miembros de las Fuerzas Armadas que lo precisen, así como proporcionar alojamiento logístico a las Unidades, Centros y Organismos del término municipal. En su escrito se manifiesta que, conforme a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de

27 de mayo de 2011, la afectación de los bienes propiedad del Estado a la Defensa Nacional ya no tiene que producirse directamente como imponía la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

El elemento que determina la exención del impuesto es el de la afectación del inmueble al servicio de la defensa nacional. Tal afectación puede ser expresa y venir así determinada por Real Decreto del Consejo de Ministros, o en su caso por la correspondiente Orden del Ministro de Defensa. No obstante, también se puede producir una afectación tácita derivada del efectivo uso o destino del inmueble en cuestión. En nuestro caso, la Residencia xxxxxxxxxxxxxxxx está destinada primordialmente al cumplimiento de las funciones propias de la Defensa Nacional, estando reconocido por la Orden del Ministerio de Defensa de 15 de diciembre de 1992. El art. 4 b) de la Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo, por la que se establece la clasificación, usuarios y precios que deberán regir en las Residencias Militares del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y en la Instrucción General 2/10 de Clasificación, uso y funcionamiento de las Residencias Militares del Ejército de Tierra del Jefe de Estado Mayor del Ejército, establecen que las Residencias Logísticas Militares se sitúan normalmente fuera de una base o acuartelamiento y su finalidad principal es la de proporcionar alojamiento y otros servicios complementarios al personal militar que lo precise por razón del servicio y a sus familias.

En este sentido, ha de sustentarse en criterios fehacientes que acrediten el verdadero destino del inmueble, debiendo permitir éste, directa o indirectamente, el desarrollo de las funciones propias de la Defensa Nacional. En la sentencia señalada se alude a la posible afectación de distintas instalaciones o inmuebles a la Defensa Nacional, por su mera contribución, al menos indirecta, al cumplimiento de las funciones que son propias de ésta.

La xxxxxxxxxxxxxxxx acredita las exigencias determinadas, al ser su finalidad la de proporcionar alojamiento logístico a las Unidades, Centros y Organismos del término municipal por no existir ningún alojamiento logístico militar para mandos en la plaza de Cartagena. Por tanto, se considera que reúne los requisitos para estar exenta en virtud de lo establecido en el art 62.1.a) L.H.L.

Nº REA: 19/2013

Nº RESOLUCIÓN: 35/2014.

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: EXENCIÓN.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

La cuestión planteada en la reclamación es si el inmueble que alberga al museo arqueológico se encuentra exento. El reclamante alega en primer lugar que no es propietario de la construcción realizada. En segundo lugar establece que dicha construcción alberga a un museo, estando exento. Sin embargo, en el expediente se observa que la liquidación correspondiente al ejercicio 2008 se ha producido en septiembre de 2012 y, por tanto, una vez que se ha producido la prescripción del citado ejercicio. En este sentido se ha manifestado la Dirección General de Tributos de V-1466/12. Por

lo que respecta al ejercicio 2009, una vez practicada la liquidación se presenta recurso de reposición que es estimado, procediéndose a la anulación de la liquidación practicada. Con posterioridad, se emite una nueva liquidación exactamente igual a la anulada. En este caso. Una vez emitida dicha resolución favorable a los intereses del administrado y siendo firme, pues no ha habido recurso o reclamación económico administrativa contra la misma, no cabe emitir nueva liquidación, sin perjuicio del inicio de un procedimiento que declare lesiva dicha resolución para el interés público y su posterior recurso contencioso administrativo. Por tanto, procede la anulación de ambas liquidaciones.

Nº REA: 111/13, 112/13 y 113/13. 2/2014

Nº RESOLUCIÓN: 40/2014; 78/2014.

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: EXENCIÓN.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

Se plantea por el reclamante la exención de los centros de salud del ámbito territorial del municipio de Cartagena, en virtud de la exención absoluta del art 65 de la Ley General de Seguridad Social. Establece el art 62.3 de la LHL lo siguiente: “las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la ordenanza fiscal.”

Aquí es donde encontramos la limitación establecida por la normativa fiscal vigente. ¿Qué sentido tendría establecer una exención potestativa para centros sanitarios de titularidad pública si se encuentran amparados por la exención absoluta del art 65 de la Ley General de la Seguridad Social? Pues ninguno, ya que el art. 62.3 lo que hace es establecer esa limitación y excepción, mediante la creación de esta exención potestativa, precisando de su regulación en la Ordenanza Municipal. Habilitada legalmente la posibilidad de la exención, se le da la posibilidad a los ayuntamientos de establecerla mediante la oportuna ordenanza fiscal, manifestación, patente y clara, de la autonomía financiera municipal reconocida constitucionalmente.

En el municipio de Cartagena la ordenanza reguladora del IBI no ha establecido exención alguna a favor de los bienes cuya titularidad corresponda a los centros sanitarios de titularidad pública. Por tanto, se entiende que los recibos cuestionados son ajustados a derecho, no existiendo motivo para su anulación.

Nº REA: 167/2013

Nº RESOLUCIÓN: 58/2014.

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: EXENCIÓN. AFECTACIÓN A LA DEFENSA NACIONAL.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El artículo 62.1.a) de la Ley de Haciendas Locales establece que estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, (IBI), los bienes y servicios del Estado afectos a la Defensa Nacional, afectación que en este caso queda acreditada.

Nº REA: 117/2013

Nº RESOLUCIÓN: 64/2014.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: EXENCIONES. AFECTACIÓN A LA DEFENSA NACIONAL.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 62.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, estarán exentos los inmuebles del Estado afectos a la Defensa Nacional. El elemento que determina la exención del impuesto es el de la afectación de los inmuebles al servicio de la Defensa Nacional. Tal afectación puede venir determinada por Real Decreto del Consejo de Ministros (así, art. 5 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones para la Defensa Nacional y el art. 8 del Real Decreto 689/1978, de 19 de febrero), o, en su caso, por la correspondiente Orden del Ministro de Defensa (así, entre otras, SSTSJ de Galicia: 1768/2006 de 22 de noviembre, o 106/1998, de 20 de febrero). A los efectos de considerar la afectación de los bienes delimitados por tales actuaciones ministeriales se han de tener en cuenta, sin embargo, una serie de cuestiones.

Indudablemente la exención está prevista en la Ley para excluir a aquellos bienes del Estado en los que efectivamente se estén desarrollando funciones que sirvan para el desarrollo de un servicio público, en el caso que nos ocupa, la Defensa Nacional. De este modo, será la verdadera utilización del inmueble en cuestión para tal fin, la que actúe como elemento constitutivo del presupuesto de hecho de la exención, no obstante la existencia o no de reconocimiento expreso. Conforme a ello, y en la comprobación de ese efectivo destino, puede darse el caso de bienes afectos sin reconocimiento expreso (cabe recordar la posibilidad de la existencia de la afectación tácita, así, SSTSJ de Galicia 106/1998, de 20 de febrero, de 21 de abril de 2004, o de 22 de noviembre de 2006) e, incluso, de bienes inicialmente afectos, de posterior empleo o desafectación.

Sin perjuicio pues del expreso o tácito reconocimiento, la comprobación del verdadero destino del inmueble, directa o indirectamente dirigido al cumplimiento de las funciones propias de la Defensa Nacional ha de efectuarse caso a caso, teniendo en consideración criterios que, en muchos casos, se han ido precisando por la propia jurisprudencia. Esto es lo que ocurre precisamente con aquellas instalaciones en las que se desarrollan

actividades de ocio o recreo. Respecto a tales instalaciones se ha reconocido reiteradamente la exención de aquéllas que se encuentran integradas en bienes «afectos directamente a la Defensa Nacional» (entre otras, STSJ de Madrid, 790/2009, de 25 de junio, o STSJ de Castilla y León 2661/2005, de 5 de diciembre,), siendo lo determinante, en cualquier caso, que formen parte de un solo todo destinado a tal fin. Se justifica de este modo la exención de aquellas instalaciones integradas en instalaciones militares en las que se desarrollen actividades sociales o culturales, que redunden en beneficio del personal, dadas sus intensas jornadas de permanencia dentro de los recintos militares, siendo por ello exigencia que sean utilizadas sólo por el personal militar o civil destinado en las bases o acuartelamientos. Es pues la función pública desempeñada por sus ocupantes, y la mejor y más eficiente prestación del servicio, lo que legitima la exención de gravamen de tales instalaciones, en tanto que forman parte del régimen especial del recinto en que se encuentran.

solicita el reclamante la suspensión de la ejecución de las liquidaciones impugnadas. Conforme a lo dispuesto en los artículo 233.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder, en los términos que se establezcan reglamentariamente. La intención del ahora reclamante es la de la concesión de la suspensión de las liquidaciones de IBI referidas en los Antecedentes de Hecho, debería por ello presentar las garantías oportunas. De dicha obligación queda sin embargo eximido el ahora reclamante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Por lo demás, y con relación a la pretensión del recurrente de acordar la concesión, en su caso, de la exención total y permanente del impuesto, cabe indicar que este Órgano carece de competencia para pronunciarse respecto a la concesión o denegación de exenciones, pudiendo sólo revisar la procedencia o no de las mismas.

Nº REA: 118/2013

Nº RESOLUCIÓN: 65/2014.

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: EXENCIONES. AFECTACIÓN A LA DEFENSA NACIONAL.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 62.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, estarán exentos los inmuebles del Estado afectos a la Defensa Nacional. Se trata en la presente reclamación de dirimir si los inmuebles sobre los que se han girado las liquidaciones de IBI están o no afectos a tal servicio, debiendo gozar o no de la exención referida.

El elemento que determina la exención del impuesto es el de la afectación de los inmuebles al servicio de la Defensa Nacional. Tal afectación puede venir determinada por Real Decreto del

Consejo de Ministros (así, art. 5 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones para la Defensa Nacional y el art. 8 del Real Decreto 689/1978, de 19 de febrero), siendo suficiente, no obstante, la correspondiente Orden del Ministro de Defensa (así, entre otras, SSTSJ de Galicia: 1768/2006 de 22 de noviembre, o 106/1998, de 20 de febrero).

Nº REA: 57/2014

Nº RESOLUCIÓN: 116/2014.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: EXENCIONES. BIENES AFECTOS A LA DEFENSA NACIONAL.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Este Consejo se ha manifestado en reiteradas resoluciones acerca de la exención de la mayoría de los bienes contenidos en la relación que aporta el reclamante. Con respecto a otras, existen actos de anulación de la liquidación en ejecución de Sentencia.

Determinadas referencias catastrales, ****, tienen las características que este Consejo considera necesarias para la exención.

En las resoluciones anteriores a ésta, constan los Fundamentos de Derecho tenidos en cuenta por el Consejo con respecto a esta cuestión, fundamentos a los que esta Resolución se remite.

Por otra parte, no cabe considerar al *** contribuyente en 2014 por la titularidad de bienes transferidos hace años, y que a la fecha de devengo no le pertenecían.

Nº REA: 11/2014, 142/2013, 17/2014, 151/2013

Nº RESOLUCIÓN: 117/2014, 120/2014, 124/2014, 133/2014.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: EXENCIONES.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

La solicitud de la exención del IBI se desestimó por entender que no se acreditaba su afección a actividades o finalidades religiosas. Tras la sentencia del TS por recurso de casación en interés de ley se establece el régimen tributario de la Iglesia Católica, en la actualidad, respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de la siguiente forma:

“1º si se trata de entidades de la Iglesia Católica del artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, le resulta de aplicación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista en el apartado 1 del art 15 de la Ley 49/2002 respecto de los inmuebles de que sean titulares catastrales y sujeto pasivo estas entidades, siempre que no estén afectos a actividades económicas y los que estén afectos a explotaciones económicas cuyas rentas se encuentren exentas del Impuesto sobre Sociedades en virtud del art. 7 de la Ley 49/2002.

Además, por aplicación del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, están exentos del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles los inmuebles enumerados en la letra A) del art. IV de dicho acuerdo.

2º si se trata de las asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el art. V del AAE, y que se dediquen a actividades religiosas, benéficas o docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, les será de aplicación la exención establecida en el art. 15 de la ley 49/2002 para las entidades sin fines lucrativos, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la misma. “

Nº REA: 134, 135 y 136/2013.

Nº RESOLUCIÓN: 144/2014.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: EXENCIÓN.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

Se plantea la exención de determinadas unidades catastrales integrantes del BICE Puerto de Cartagena, por tratarse de zonas ocupadas por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas

En este sentido, dado que los puertos comerciales tienen la consideración de BICES y como tales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configuran a efectos catastrales como un único inmueble, por lo que no cabe apreciar la concurrencia en una parte de su superficie de un supuesto de exención. Así lo dice expresamente la Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 22 de septiembre de 2010 (V2100-10): “los supuestos de no sujeción o exención en el IBI regulados en el TRLHL se aplican sobre la totalidad de un bien considerado en su conjunto, sin que puedan aplicarse sobre parte de superficie del mismo. Para que un bien inmueble esté no sujeto o exento en el IBI deben cumplirse los requisitos exigidos legalmente para la totalidad del bien, sin que sean admisibles supuestos de no sujeción o exención sobre una parte de un bien inmueble”.

Por tanto, en virtud del criterio establecido en dicha consulta, no cabría aplicar exención sobre una parte de la superficie del Bien Inmueble de Características Especiales, sin perjuicio de su calificación catastral, ya que el BICE se define como un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.

Nº REA: 68, 69, 70, 79, 83, 84, 85, 86 y 87/2014

Nº RESOLUCIÓN: 145/2014.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: EXENCIONES. INMUEBLES AFECTOS A ACTIVIDADES SANITARIAS.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El artículo 65 de la Ley General de la Seguridad Social establece un régimen de beneficios fiscales que, tanto interpretado literalmente como contextualmente, ofrece pocas dudas. Dicho artículo remite para la existencia de exenciones a la normativa que las establezca para el Estado, y el Estado no goza de exención alguna pura e incondicional en el Impuesto sobre bienes inmuebles; por esta razón, no es de aplicación a la cuestión que se sustancia en este expediente la contestación a consulta alegada por la reclamante, referida al Impuesto sobre Sociedades, con un régimen de exenciones netamente distinto del del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dicho esto, y partiendo de la base de que no existe exención, la ley añade que será la normativa fiscal la que en cada caso determine el régimen de beneficios fiscales aplicable, por lo que respecta a este caso y al Impuesto concreto, al Servicio Murciano de Salud; y esto es lo que hace la Ley de Haciendas Locales en su artículo 62 en sus apartados 1, 2 y 3:

Establece la exención, ex lege, de ciertos bienes, entre los cuales sólo se contemplan algunos pertenecientes al Estado, pero no aquellos cuyo impuesto es en este expediente objeto de reclamación.

Establece una exención rogada pero que nace por voluntad de la ley para otros.

En tercer lugar, determina de forma diferenciada la posibilidad de que las ordenanzas fiscales establezcan una exención para los inmuebles de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública: "Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la ordenanza fiscal".

Es decir, determina que la concesión de la exención depende de la voluntad del Ayuntamiento, en el ejercicio de su autonomía política y financiera, y que, en caso de que se establezca, la ordenanza deberá regular los aspectos materiales y formales de dicha exención.

Este esquema es tan claro que toda la jurisprudencia sobre el caso determina la inexistencia de exención si ésta no se ha constituido mediante una ordenanza.

Por citar sólo algunas de las Sentencias al respecto. En primer lugar, cuatro del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia; las Sentencias de 19 de mayo de 2014, (rec. 46/2014), 421/2014, de 29 de mayo, 457/2014, de 12 de junio, y 598/2014, de 23 de julio. En todas ellas el Tribunal Superior de Justicia deniega el derecho a la exención, y lo hace frente al Servicio

Murciano de Salud en asuntos idénticos al actual pero en otras poblaciones de la Región: “En definitiva la LGSS 1/1994 reconoce en el art. 65.1 la exención con los límites y excepciones señaladas por la Ley vigente en cada momento y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dice que la exención *podrá* establecerse en las Ordenanzas fiscales por los Ayuntamientos a los bienes de titularidad pública que presten servicios sanitarios. Por lo tanto el art. 65.1 no establece una exención absoluta e incondicionada, sino sujeta a los límites y excepciones establecidos en las leyes fiscales vigentes en cada momento y tales límites se establecen en la actualidad en el referido Texto Refundido 2/2004, que señala solo la posibilidad de que los Ayuntamientos discrecionalmente incorporen la exención en sus ordenanzas fiscales, y solo por tanto, desde ese momento. Es cierto que este último precepto se refiere a los bienes de titularidad pública, concepto más amplio que el establecido en el art. 65 LGSS que se refiere a los bienes inmuebles que prestan servicios a la Seguridad Social, hoy gestionada por el SMS en esta Región. Sin embargo, es indudable la aplicabilidad del art. 62.3 de la Ley de Haciendas Locales 2/2004 a los bienes que prestan servicios a la Seguridad Social, gestionados por el SMS, ya que como éste mismo reconoce, son de titularidad pública”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, (Valladolid), se ha manifestado en sentido análogo en Sentencias de 22 de enero, (rec. 183/2001), y 26 de marzo, (rec. 195/2001), ambas de 2002: “Pero es que además, comparando las expresiones *gozarán de exención los bienes siguientes* del principio de aquel artículo, con las del último párrafo transcritas más arriba, sucede que no es posible equiparar un término imperativo cual es el de *gozarán* con uno que va referido a una posibilidad como el de *podrán*: en el primer caso la ley impone la exención mientras que en el segundo contempla su existencia y confiere potestad para su establecimiento y reconocimiento a una determinada Administración.

Ahondando en esta idea, la exención del último párrafo condiciona la realidad y efectividad del beneficio fiscal, entre otros extremos, a una regulación determinada y concreta como es la ordenanza fiscal municipal; con lo cual existirá siempre y cuando el Ayuntamiento incorpore aquella a sus normas tributarias, lo que evidentemente es una potestad suya y de libre ejercicio. Que ello es así no deja lugar a dudas la dicción del precepto que por dos veces hace mención a esas ordenanzas: tanto para el establecimiento efectivo como para regular los restantes aspectos sustantivos y formales.

Por tanto y como segunda consecuencia, el beneficio expresado es de establecimiento potestativo por el Ayuntamiento sin que el artículo 64 imponga al mismo aquella exención”.

En sentido análogo, la Sentencia del TSJ de Madrid de 30 de abril de 2004, (rec.1141/2001): “El centro del presente recurso radica en como habría de interpretarse la palabra *podrán*, y para ello habrá que acudir al artículo 3 del Código civil y es indudable que si el sentido literal de la misma es suficiente no hay necesidad de utilizar otro criterio; y así *podrán* no es un imperativo, sino que a quien va dirigido, Entidades Locales, les concede la facultad, tanto en sentido positivo como negativo, siendo este último el utilizado por el Ayuntamiento, que además con ello ha

hecho uso de la autonomía que le concede la Ley, sancionada en vía jurisdiccional-constitucional. Por lo que estamos ante el supuesto de "desestimar el presente recurso contencioso-administrativo".

CUOTA LÍQUIDA.

Nº REA: VARIOS

Nº RESOLUCIÓN: VARIAS.

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: CUOTA LIQUIDA (BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA).

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación en la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. Y añade que la ordenanza reguladora deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

En este sentido, la ordenanza reguladora del IBI vigente para el ejercicio de 2014 regula la bonificación en la cuota en el artículo 6, apartados 4.1 y 2, determinando la cuantía de la bonificación, y enumerando los requisitos y documentación a aportar en los diferentes casos. De este modo, y para disfrutar de la misma, se requiere la concurrencia de una serie de requisitos materiales y formales. Así, deberá presentarse instancia, a la que habrá de acompañar la siguiente documentación: fotocopia compulsada del título de familia numerosa en vigor; fotocopia del último recibo del IBI, del inmueble vivienda habitual por el que se solicita la bonificación, o referencia catastral del mismo; y fotocopia compulsada de la escritura de propiedad del bien inmueble sobre el que se solicita la bonificación. Además de todo ello será necesario presentar, como documentación específica y adicional para esta bonificación, certificado de la Agencia Tributaria en el que consten los ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar en el ejercicio inmediatamente anterior del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tal y como indica el mismo precepto, el límite para la presentación de las solicitudes para la bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles a las familias será el 31 de diciembre, con anterioridad al devengo del impuesto. Los contribuyentes que se consideren con derecho a la obtención de dicho beneficio fiscal deberán por ello solicitarlo expresamente con carácter previo al devengo del impuesto, es decir, antes del día 1 de enero, sin que se aplique con carácter retroactivo. De conformidad con lo expuesto, y de los datos del expediente, se desprende que el reclamante no ha efectuado la solicitud de la correspondiente bonificación en el plazo indicado, no cumpliéndose, en consecuencia, uno de los requisitos exigidos en la normativa. Todo ello, además, sin perjuicio, de la comprobación de la concurrencia o no de los demás

requisitos sustantivos o materiales necesarios para poder disfrutar de la bonificación.

Nº REA: VARIAS

Nº RESOLUCIÓN: VARIAS.

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: CUOTA LIQUIDA (BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA).

SENTIDO: ESTIMATORIA.

La Ordenanza del IBI del Ayuntamiento de Cartagena, vigente para 2014, establece en su artículo 6.4.1 que “los sujetos pasivos del Impuesto, que ostenten la condición de titulares de familia numerosa en los términos establecidos legalmente disfrutarán de una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto, cuando concurren las circunstancias siguientes y con arreglo a los siguientes porcentajes. Se tomará en cuenta el valor catastral de la vivienda con un límite de 70.000 euros a efectos de determinar la capacidad económica del solicitante. Si por la Ley de Presupuestos Generales del Estado se aprobara la actualización de los valores catastrales, se entenderá incrementado, en el mismo porcentaje, este valor máximo a considerar en el límite para el acceso a la bonificación por familia numerosa”.

La Orden del Ministerio de Hacienda 2308/2013, de 5 de diciembre, incluye a Cartagena entre los municipios a los que les es de aplicación la actualización del valor catastral, de aprobarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014. La Ley de Presupuestos Generales del Estado, (Ley 22/2013, de 23 de diciembre) que aprobó la actualización, estableció el coeficiente del 1,1, aplicable sobre los valores de 2013. La ordenanza se aprobó en el pleno del día 31 de diciembre.

Lo que establece la ordenanza es que, de aprobarse un coeficiente de actualización de valores catastrales, (1,1), cuestión desconocida cuando se aprobó el proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales para 2014 y se realizó la publicación provisional, éste operaría también sobre el valor límite, (70.000). Así pues, el valor límite para acceder al beneficio hay que entenderlo en 77.000€.

Nº REA: 27/2014

Nº RESOLUCIÓN: 115/2014.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: CUOTA LIQUIDA.(BONIFICACIÓN. FAMILIA NUMEROSA)

SENTIDO: ESTIMATORIA.

La cuestión que se plantea es la siguiente: existen dos cabezas de familia: la ex esposa, que vive en una de las dos viviendas que tenía la antigua unidad familiar, y el reclamante, que vive en la otra. La ex esposa tiene dos hijos, por lo que no ha solicitado, según parece, la bonificación. El reclamante tiene tres hijos, y la condición de familia numerosa debidamente reconocida y acreditada.

El artículo 74.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que “las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa. La ordenanza, (añade), deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales”.

En aplicación de la autorización legal, el Ayuntamiento de Cartagena ha establecido y desarrollado dicha bonificación; el artículo 6 de la Ordenanza, en su punto 4.1, determina que los sujetos pasivos del Impuesto, que ostenten la condición de titulares de familia numerosa en los términos establecidos legalmente disfrutarán de una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto. En la letra b) de su punto 4.2, que la bonificación será del 30% de la cuota del impuesto, para la vivienda que constituya la residencia habitual, cuando se trate de familias numerosas de categoría general y se cumplan ciertos requisitos. Y más adelante, que este beneficio fiscal se aplicará exclusivamente a la vivienda que constituya residencia habitual, en los términos fijados en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de la familia numerosa, entendiéndose por tal donde resida el cabeza de familia con esta o en su defecto de quien ostente la guardia y custodia de los hijos.

Así pues los requisitos a cumplir, por lo que respecta a este expediente, son los siguientes:

Que el sujeto sea titular de familia numerosa.

Que la vivienda que genera el beneficio sea la residencia habitual de la familia.

Es este segundo requisito el que plantea los problemas a resolver. La ordenanza no prevé expresamente la situación que se da cuando, en un caso de separación, nulidad o divorcio, pasan a existir dos viviendas y los hijos viven alternativamente, por determinados períodos de tiempo, en ambas. Prevé el supuesto de ausencia de padre o madre, (“en su defecto”), y la existencia de una vivienda indubitada, pero no el caso, no idéntico, que se da en este expediente, en el que lo que sucede es que no falta padre o madre, sino que existen dos viviendas que habitualmente son utilizadas por los hijos. Remite además a la normativa del IRPF a los efectos del concepto de vivienda habitual. En la actualidad no existe en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, deducción por vivienda habitual, y esto ha ocasionado que el reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, haya visto suprimidos, por obra del Real Decreto 960/2013, los artículos 54 e inmediatos siguientes, que articulaban dicho concepto.

Dado que lo que la Ordenanza hace es establecer un beneficio fiscal, y en función de lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil, a tenor del cual “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”, procede analizar el sentido que la jurisprudencia ha dado a la expresión

“residencia”. Dicho sentido es amplio, y cuando se analiza con respecto a una vivienda, como es el caso para la familia constituida por el reclamante y sus tres hijos, no se vincula tanto a la estancia efectiva y permanente como a la relación de los hijos con un lugar que es su punto de referencia durante determinados períodos de tiempo, punto de referencia que el titular de la patria potestad ha de mantener, junto con los demás gastos de la familia. A esta consideración se refiere la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 1342/2013, de 17 de diciembre:

“En resumen, que estamos ante una potestad que reconoce una amplia autonomía municipal, uno de cuyos límites es, como es obvio, que no puede ser discriminatoria. Y para decidir si, en el caso concreto, la fijación de determinados requisitos formales o materiales lo son es determinante analizarlos desde la óptica de la finalidad de la norma cuestionada.

Pues bien, la finalidad primordial de una bonificación en favor de las familias numerosas es, conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, contribuir a promover las condiciones para que la igualdad de sus miembros sea real y efectiva en el acceso y disfrute de bienes económicos, sociales y culturales.

Y su preámbulo lo explica recordando lo que todos sabemos, que el coste que para ellas representa el cuidado y educación de los hijos, o el acceso a una vivienda, puede implicar una diferencia sustancial en el nivel de vida respecto de otras familias con menos hijos o sin ellos. Por ello, y en base al principio de igualdad material del artículo 9.2 de la Constitución Española, el legislador (también el municipal) debe introducir las medidas correctoras necesarias para impedir esa situación de desventaja. Una de ellas es la bonificación que nos ocupa.

La finalidad primordial, por tanto, de la bonificación por familia numerosa en el IBI en la vivienda habitual, o en las tasas de agua basura y alcantarillado, es facilitar que este tipo de familias soporten una cuota inferior al resto de familias para que puedan disponer de esa cantidad a fin de dedicarla al acceso y disfrute de bienes económicos, sociales y culturales, evitando con ello su posición de desventaja en su nivel de vida con respecto de las familias que no tienen la consideración legal de numerosa”.

OTROS.

Nº REA: 120/2013

Nº RESOLUCIÓN: 99/2014.

ASUNTO: IBI

CONCEPTO: TRAMITACIÓN. DIVISIÓN DEL RECIBO ENTRE COTITULARES.

SENTIDO: PARCIALMENTE ESTIMATORIA.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 61.1 TRLRHL, el IBI grava la titularidad de una concesión administrativa, un derecho de superficie, un derecho de usufructo o un derecho de propiedad sobre un bien inmueble. De forma que la existencia de los primeros excluye el sometimiento a gravamen de los sucesivos.

El artículo 63.1 del mismo texto legal, establece que son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas, y los entes del artículo 35.4 LGT que realicen el hecho imponible.

Se solicita en la reclamación que, dado que existe un supuesto de cotitularidad entre X sujetos, se emita el recibo a cada uno de ellos por su parte correspondiente. La cuestión ha sido tratada por las Contestaciones a Consultas Vinculantes de la Subdirección General de Tributos Locales del Ministerio de Hacienda, V1577-13, de 10 de mayo de 2013, que cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 7 de febrero de 1996, y V2885-11, de 13 de diciembre de 2011.

La primera Contestación, de 2013, se remite al régimen regulado en el artículo 35.7 LGT, a tenor del cual la concurrencia de varios obligados en el presupuesto de una obligación tributaria determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública, y añade que cuando la ley sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división, y que para que proceda la división es indispensable que el solicitante facilite los datos personales y domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos concurre. Analiza además la Contestación el artículo 64.2 TRLRHL, a tenor del cual, responden solidariamente de la cuota de IBI, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario, y añade que de no figurar inscritos la cotitularidad se exigirá por partes iguales en todo caso. Concluye en que hay derecho a solicitar la división de la liquidación.

La Contestación de 2011 se remite al artículo 392 del Código Civil para concluir en que ante un supuesto de copropiedad, los sujetos pueden optar por constituir una comunidad de bienes, que será sujeto pasivo del IBI, o por no hacerlo, en cuyo caso se producirá un supuesto de concurrencia de varios titulares en la realización del hecho imponible, y todos y cada uno de los cotitulares ostentarán la condición de sujeto pasivo, en su cuota correspondiente. Añade que, de acuerdo con el artículo 77.4 TRLRHL, el IBI se gestiona a partir de los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario, de forma que si los copropietarios del bien constan en el Catastro Inmobiliario como titulares catastrales del inmueble, correctamente identificados y con la cuota de propiedad de cada uno de ellos, estos datos deben de figurar en el padrón catastral. Concluye en que, si esto es así, se tiene derecho a solicitar la división de la liquidación del Impuesto.

En el presente expediente parece acreditado que, según los datos del Catastro, existen X titulares en concepto de propietarios, y no se ha constituido comunidad de bienes alguna, por lo que tienen derecho a la división del recibo.

Nº REA: 68/2013

Nº RESOLUCIÓN: 103/2014.

ASUNTO: IBI.

CONCEPTO: OTROS. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Como consecuencia del nuevo valor otorgado al inmueble se emite un nuevo recibo de IBI por los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Una vez realizado el ingreso el interesado reclama la devolución del ingreso realizado con el primer recibo. Se accede a lo solicitado por los ejercicios 2009 y 2010, pero se deniega por el ejercicio 2008 por entender que está prescrito. El criterio sería si el ingreso indebido se ha producido con el ingreso de la segunda liquidación, ya que lo correcto hubiera sido, al realizarse la nueva liquidación por el nuevo valor catastral y ser esta inferior al importe ingresado inicialmente, debería procederse a la devolución del exceso. Ya que no se ha hecho, en ningún caso puede pretenderse el ingreso de la nueva liquidación, por lo que se entiende que con este ingreso se ha producido un ingreso indebido y corresponde a la devolución.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

EXENCIONES.

Nº REA: 16/2014

Nº RESOLUCIÓN: 105/2014.

ASUNTO: IVTM

CONCEPTO: EXENCIONES. MINUSVALIA.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El artículo 93 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece una exención de carácter rogado, a los efectos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para los sujetos que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

La ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el año 2013 en la ciudad de Cartagena, dispone en su artículo 3 que para poder aplicar la exención mencionada, los interesados deberán instar su aplicación con carácter previo al devengo del impuesto, sin que se pueda aplicar con carácter retroactivo. Entre los requisitos formales para poder acceder a dicha exención establece el de la necesidad de aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal. Manifiesta que a los efectos de la exención, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. Para acreditar esta condición, el interesado deberá aportar

el certificado actualizado o resolución expedidos por el Órgano competente (IMAS o equivalente en la Comunidad Autónoma que corresponda). Y añade: “los pensionistas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, sólo disfrutarán de la presente exención cuando, además, tengan reconocida la minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, en los términos anteriormente expuestos, no siendo suficiente la aportación exclusiva de documento acreditativo del reconocimiento de pensión por dicha incapacidad”.

La cuestión que se plantea en esta reclamación se refiere a la posibilidad de dar por acreditada la minusvalía sin necesidad de aportar justificación concreta de ésta, sino por la concurrencia de una causa de incapacidad acreditada.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, define su ámbito objetivo de aplicación en el artículo 5, que deja fuera de él a las cuestiones tributarias. El carácter de Texto Refundido de la Ley hace que sean perfectamente aplicables a ésta todos los razonamientos y decisiones que se produjeron en relación con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. El Real Decreto 1414/2006 mencionado en la reclamación no es más que un desarrollo reglamentario de la Ley 51/2003, que no puede definir los ámbitos legales de aplicación.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sus sentencias 4115/2007, de 26 de octubre, 3090/2007, de 6 de julio, y 3262/2006, de 3 de noviembre, se ha planteado la cuestión de la asimilación entre la incapacidad y la minusvalía, llegando a la conclusión de que “las diferencias entre una y otra situación resultan, sin embargo, sustanciales. De concepto en primer lugar. La invalidez permanente de nivel contributivo y sus grados, regulada en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se establece sobre el concepto de discapacidad profesional: es la situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, o de curación incierta o a largo plazo, que disminuyan o anulen su capacidad laboral... La minusvalía, regulada en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, en cambio, se fija en función de la discapacidad global de la persona y su incidencia personal, laboral y social: se entiende por minusválido toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales (artículo 7.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos)”. Así pues, minusvalía e invalidez son conceptos cualitativamente distintos.

Con respecto a la aplicación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, (y en virtud de lo dicho anteriormente, también del Texto Refundido de la Ley que Regula los Derechos de las Personas con Discapacidad), a todos los sectores del Ordenamiento, y por lo tanto, a la igualdad de trato

que establece a sus efectos entre sujetos afectados de minusvalía y de incapacidad en su artículo 1.2, también son claros la jurisprudencia y las resoluciones existentes. Las sentencias mencionadas con anterioridad niegan la aplicación de la Ley a las situaciones que se encuentran fuera del ámbito estricto de aplicación que establece el propio artículo 3 de dicha Ley, en la actualidad, el 5 de la nueva; (STSJ Asturias 3262/2006, FJ Primero): “Ante la disparidad de conceptos, forma de determinación y, asimismo, de efectos, causa esta última de la petición del actor, la equiparación pedida ha de venir dada con claridad en una o varias normas jurídicas... El tenor literal del art. 1.2 de la Ley 51/2003 limita el alcance de la equiparación «a los efectos de esta Ley»;... El art. 3 precisa el ámbito de aplicación de la Ley, por tanto, las materias en la que opera la asimilación: telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación; transportes; bienes y servicios a disposición del público; relaciones con las administraciones públicas; y, finalmente, en el ámbito del empleo y la ocupación, donde la Ley 51/2003 tiene carácter supletorio de lo dispuesto en la legislación específica de medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación”. Y añade: “La interpretación sistemática intra Ley y extra Ley tampoco sustenta la equiparación general. Intra Ley, la lectura combinada de la exposición de motivos y los arts. 1 y 3 se encargan de precisar que la Ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en los ámbitos materiales más relevantes para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos con alguna discapacidad. Extra Ley, no solo falta en nuestro ordenamiento jurídico una declaración normativa clara y directa sobre la equiparación general de situaciones, sino que se siguen produciendo manifestaciones normativas previendo supuestos de equiparaciones particulares, esto es, para efectos concretos, que serían superfluas si la Ley 51/2003 contemplara la equiparación absoluta... La finalidad a la que responde la Ley 51/2003 tampoco determina interpretaciones de la equiparación que vayan más allá de su contenido, cuya preocupación por delimitar el ámbito de aplicación de la Ley es manifiesta.”

Además de las sentencias citadas, las Resoluciones de la Dirección General de Tributos 921/2011, de 6 de abril, y 203/2007, de 29 de enero, coinciden en concluir en lo siguiente: “Concluyendo, si en la Ordenanza fiscal del IVTM al regular los términos en los que se concederá la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 del artículo 93 del TRLRHL, exención del pago del IVTM de vehículo matriculado a nombre de una persona con minusvalía, se establece para todos los sujetos pasivos contemplados en la exención, sin excepción alguna, la obligación formal de aportar certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente, el sujeto pasivo tendrá que aportar el mencionado certificado para que la exención le sea concedida, con independencia de que tenga reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total para la profesión habitual”, (Resolución 921), “con independencia de que tenga reconocida una pensión de retiro por inutilidad permanente”, (Resolución 203).

Por lo que respecta al certificado de la unidad de clases pasivas del Ministerio de Economía y Hacienda, tanto el ámbito de competencias de dicha unidad, referido a situaciones de incapacidad, y no a situaciones valoradas en concreto como de minusvalía, como la propia dicción, que se refiere a un rango entre el 33 y el 65%, hacen que se pueda considerar más como un certificado de incapacidad que asimila tal situación a la de una minusvalía entre el 33 y el 55% en las normas que establezcan dicha asimilación, que a una acreditación valorada de la situación de minusvalía.

Por lo que respecta a la necesidad de aportar certificado de minusvalía del IMAS, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012, (recurso 3275/2011), concluye en que los ayuntamientos pueden exigir una forma específica de acreditación, con independencia de que si no lo hacen, cualquier medio de prueba sea válido. El Ayuntamiento de Cartagena exige el certificado mencionado.

ICIO.

OBLIGADO TRIBUTARIO.

Nº REA: 86/2013

Nº RESOLUCIÓN: 33/2014.

ASUNTO: ICIO

CONCEPTO: OBLIGADO TRIBUTARIO. BASE. TRAMITACIÓN. SUSPENSIÓN

SENTIDO: PARCIALMENTE ESTIMATORIA.

La LGT, en su artículo 36.2, establece que es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible, y en su número 3, que es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. El artículo 101.2 LRHL determina que en el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto nunca puede coincidir con el contribuyente, la ley sólo lo regula cuando las posiciones subjetivas no coinciden, y para eso hace falta que los sujetos tampoco coincidan. Las sentencias del tribunal supremo de 10 de noviembre de 2005 y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 337/94, de 26 de octubre, han declarado que en el caso en el que un mismo sujeto es dueño de la obra y solicitante de la licencia, pero existe un constructor distinto, éste último asume la condición de sustituto del contribuyente.

La Administración, por otra parte, ha de dirigirse en primer lugar, precisamente, al sustituto, porque su situación no se puede confundir con la de un responsable, sino que es una situación de sujeto pasivo directo y en primer término frente a la

Administración. En este sentido, entre otras, se han manifestado las SS del TSJ de Aragón 297/2004, de 26 de marzo, del del Galicia de 24 de enero de 1997, del de Extremadura 636/1996, de 28 de mayo o del de Canarias 728/1995, de 29 de septiembre. Dado que es el sustituto el que asume la posición del contribuyente, y en función de lo dispuesto en los artículos 35.1 y 2.b), y 232.1.a) LGT, está legitimado para interponer la reclamación económico administrativa.

Este Consejo estima que tanto por los argumentos de la reclamante como por los datos que se desprenden del expediente, la liquidación adolecía de defectos formales.

La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2003 ha concluido en que “desde el punto de vista general y abstracto en que la parte recurrente ha venido planteando el dilema, habría que concluir que, si con ocasión de la impugnación administrativa de la liquidación provisional del ICIO, resultara probado que la inicial previsión razonable y técnicamente fundada, de la que antes hablábamos, ha quedado corregida por la adjudicación, a la baja, de las obras subastadas, o por cualquier otra circunstancia, a dicha nueva previsión del coste real y efectivo debería acomodarse la liquidación provisional del impuesto al resolver el recurso de reposición, pero condicionado a que conste acreditado suficientemente ese menor coste respecto al presupuesto del proyecto técnico que se presentó para obtener la licencia urbanística”. En sentido análogo se manifiestan las SSTSJ de Madrid de 16 de marzo de 2010 y 2 de febrero de 2012. La liquidación a cuenta del Impuesto debe de ser lo más aproximada posible a la futura liquidación de cuota tributaria, y por lo tanto debe de descontar las bajas de adjudicación demostradas.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y la Menor, son pacíficas en la actualidad en su consideración de que las instalaciones forman parte de la base del Impuesto en el siguiente sentido: el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de febrero de 2003, en su FJ Cuarto hace referencia a que la base incluye a las instalaciones que sirven a servicios esenciales para su utilización. Además, en sentencia de 5 de octubre de 2005, (FJ Primero). El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la sentencia 118/2007, de 26 de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su sentencia 94/2008, de 20 de febrero. En la sentencia 99/2008, de 20 de febrero, hace referencia a la existencia de un todo inescindible en su funcionamiento y utilización para llegar a una conclusión análoga, y a la misma conclusión llega en las sentencias 107/2008, de 22 de febrero y 201/2008, de 9 de abril, en la que señala que en determinados supuestos deberá computarse en la base imponible tanto el coste de adaptación o incorporación (instalación) del elemento infraestructural de que se trate la obra, construcción o instalación a las que vaya destinado, como el valor o coste del elemento mismo.

El coste de adquisición de las instalaciones que consten en un proyecto para el que se necesita de licencia de obras se incluye en la base imponible, también, según la STSJ de Extremadura 73/2009, de 12 de marzo, (FJ Tercero), o la STSJ de Galicia 301/2008, de 21 de mayo, (FJ Cuarto). También, según la STSJ de Aragón de 9 de febrero de 2011, o del TSJ de Navarra de 17 de septiembre de 2010.

Además, por las siguientes:

En primer lugar la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010, (RJ 2010/3479), a tenor de la cual se han de incluir en la base imponible los costes de adquisición de los equipos instalados, (FJ Segundo y Fallo). Esta última doctrina del Tribunal Supremo se ha seguido, también, por las SSTSJ de Murcia 879/2010, de 15 de octubre, y 944/2010, de 29 de octubre; de 18 de marzo de 2011, de 7 de mayo y de 29 de octubre de 2012. También la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N° 1 de Cartagena N° 188/2011, de 26 de abril. Se han pronunciado en el sentido de la integración de las instalaciones en la base del Impuesto, también, las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de diciembre de 2011 y la de 26 de enero de 2012, que sienta doctrina legal en este sentido.

En sentido análogo, y abogando por la integración en la base del coste no sólo de la acción de instalación, sino de la maquinaria instalada, se pronuncian, además, las contestaciones a consultas vinculantes de la Subdirección General de Tributos Locales V 1840-07, de 7 de septiembre, y V 203-08, de 4 de febrero.

Dada la legitimación de la sociedad para interponer el recurso de reposición, y esta reclamación, en la medida en que la obligación haya estado garantizada se debe de considerar que ha permanecido suspendida la ejecución del acto administrativo, lo que implica, en su caso, la imposibilidad de inicio del procedimiento de apremio.

BASE.

N° REA: 155/2012 y 205/2012.

N° RESOLUCIÓN: 23/2014.

ASUNTO: ICIO

CONCEPTO: BASE IMPONIBLE.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El ICIO grava las construcciones, las instalaciones y las obras. Tales conceptos se refieren tanto a una actividad como al resultado objetivo y material de ésta, es decir, a un objeto final. La ley no distingue de este modo entre construcción, instalación y obra como proceso y como resultado, y los tres conceptos, sin distinción entre ellos, pueden interpretarse en cualquiera de las dos acepciones. Tampoco distingue la ley, por lo que respecta a las instalaciones, entre instalación como parte e instalación como conjunto unitario de elementos. Ambas acepciones, por tanto, están dentro del hecho imponible. Si la instalación a considerar es una parte del todo, puede suceder que sea necesaria para el funcionamiento de ese todo; es en este caso en el que el concepto de inseparabilidad funcional es esencial para su integración en la base. Si no es necesaria, pero sí cumple una función dentro del todo, el concepto a tener en cuenta es el de la inmovilización por destino. Si la instalación se considera como un conjunto, como un todo unitario, lo que sucede sobre todo en las instalaciones de carácter industrial, hay que considerar incluido en la base imponible el coste asumido por el dueño de todos los

elementos que, dentro de ese todo, cumplen una función para lograr la utilidad esperada del conjunto.

Las instalaciones son parte del hecho y de la base, y por esta razón, para que sus costes estén sujetos al impuesto han de cumplir una serie de requisitos que se han ido precisando por la jurisprudencia. El ICIO grava determinados costes asumidos para poder obtener un resultado, costes que implican adquisiciones y remuneración de otros conceptos. Dadas las dificultades de concreción de esos costes, el concepto de coste real y efectivo de la obra, ha ido evolucionado de acuerdo con los criterios que la propia jurisprudencia ha ido manifestando. Conforme a esta evolución, se ha asentado como criterio de inclusión en el cálculo de la base de los distintos elementos, la concurrencia en éstos de varios requisitos: constancia en el correspondiente proyecto, así como que el proyecto requiera licencia de obras, teniendo en cuenta además consideraciones acerca de la imprescindibilidad, consustancialidad, inseparabilidad, y exterioridad o autonomía funcional del elemento, (SSTS de Justicia de Aragón 681/2002, de 12 de septiembre, FJ Segundo; de Galicia 1043/2007, de 26 de julio, FJ Tercero, 99/2008, de 20 de febrero, FJ Décimo, 176/2008, de 2 de abril, FJ Tercero; de Extremadura 73/2009, de 12 de marzo, FJ Tercero, o de Murcia 879/2010, de 15 de octubre, (FFJJ Tercero, Cuarto y Séptimo) o 944/2010, de 29 de octubre, (FFJJ Tercero, Cuarto y Quinto), así como las consideraciones de la del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010, FFJJ Segundo y Séptimo). Así en definitiva, debe existir la inseparabilidad funcional o la inmovilización por destino antes aludida, y tienen que insertarse en un proyecto de actuación que necesite de licencia de obras o urbanística, y que contemple sus costes en su presupuesto.

Respecto a la inseparabilidad predicada cabe destacar que ésta no puede ser física sino funcional; es inseparable un elemento cuando cumple una función en el seno de un todo. Casi cualquier elemento inseparable se puede separar desde el punto de vista físico, aunque sea por la fuerza, y se puede cambiar de ubicación, pero tiene que ser sustituido si se espera que se cumpla la función que antes cumplía. Cuando la inseparabilidad se entiende en sentido estricto implica una mutua dependencia, dado que el conjunto alcanza su funcionalidad con el elemento y el elemento la alcanza en un conjunto. La STSJ de Galicia 107/2008, de 22 de febrero, (FJ Segundo), avanza en la idea de la inseparabilidad del elemento como algo vinculado a consideraciones no puramente físicas, sino funcionales. Otras SSTSJ de Galicia, la 176 y 201 de 2008, (de 2 y 9 de abril; FJ Tercero en ambos casos), relacionan la imprescindibilidad con la finalidad del elemento, al referirse que tal nota se da cuando el elemento sea esencial para la habitabilidad o utilización del todo en el que se encuadra. Además, y poniendo el centro del razonamiento no en el total sino en el elemento mismo que forma parte de dicho total, la STSJ de Galicia 301/2008, de 21 de mayo, (FJ Cuarto).

Con relación al requisito de la inserción de los elementos en el proyecto de actuación que requiera licencia, cabe destacar las SSTSJ de Extremadura 73/2009, de 12 de marzo, (FJ Tercero), o la de 17 de febrero de 2009, a tenor de la cual se ha de someter a gravamen el coste del elemento instalado cuando figura en el proyecto para el cual se solicita. En el mismo sentido la STSJ de Galicia 201/2008, de 9 de abril, (FJ Tercero), o la STS de 14 de

mayo de 2010 que establece que se someten a gravamen los elementos técnicos integrantes del proyecto que sirvió de base para la obtención de la licencia y que se vinculan a él como inseparables, (FJ Segundo y Fallo).

Por lo demás, y con respecto a la constancia de los elementos en el proyecto visado y la inclusión de su montante en el presupuesto de ejecución material, no cabe duda de que sólo los actos que se integran en el hecho imponible pueden generar la existencia de montantes a imputar a la base, y que para determinar lo anterior es fundamental atender a la constancia de la existencia del elemento en el proyecto visado, y de su importe en el presupuesto de ejecución material. Entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo: 5994/1993, de 24 de abril, (FJ Primero); 16 de enero de 1995, (FJ Segundo), 15 y 17 de abril de 2000, (FFJJ Primero y Tercero); de 30 de marzo de 2002, (FJ Primero); o la STS de 14 de mayo de 2010, (FJ Cuarto).

La motivación de los actos administrativos, tal y como señala la STS de 15 de enero de 2009, aludiendo a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo, tiene por finalidad dar a conocer al destinatario las razones concretas, pero no exhaustivas, de la decisión adoptada, para que éste pueda impugnarla, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales. De este modo, y al efecto de valorar si concurre la indefensión a que se refiere el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el defecto invalidante del acto, ha de carecer de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. La motivación, señala además esta reiterada doctrina, puede contenerse en el propio acto, o bien puede realizarse por referencia a informes o dictámenes que se incorporen directamente o bien consten en el expediente administrativo instruido al efecto, y al que hubiera tenido acceso el destinatario (SSTS de 21 de noviembre de 2005, 12 de julio de 2004, o 7 de julio de 2003).

Nº REA: 97/2013; 129/2013

Nº RESOLUCIÓN: 48/2014; 53/2014.

ASUNTO: ICIO

CONCEPTO: BASE IMPONIBLE. COMPROBACIÓN.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 100.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (LRHL), el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, (ICIO) “está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia”. Así pues, el hecho imponible del Impuesto está constituido por la realización de obras aun sin obtención de la preceptiva licencia, y se deduce del expediente que en este caso el Impuesto se ha devengado efectivamente.

Por otra parte, y por lo que respecta a la solicitud en la reclamación de que se tenga la licencia por concedida, “ya que de

Lo contrario el hecho imponible no existe”, no se alega nada en la reclamación, ni consta en el expediente dato alguno, relacionado con la emisión o no de licencia; tampoco es el Consejo competente para dar por obtenida o no la licencia de obras.

El Impuesto se ha devengado efectivamente, y es exigible. Pero el artículo 102.1 LRHL establece que “la base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla”. Ésto además de excluir de la base ciertos conceptos cuyo detalle no es importante en esta resolución, que atiende a la valoración que puede servir para realizar una liquidación por el Impuesto, implica ciertas consecuencias.

El artículo 103, en el último párrafo de su número 1, determina que “una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, (la tenida en cuenta para hacer la liquidación a cuenta cuando se hubiera solicitado la licencia de obras en forma) practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda”.

Del mandato de los artículos 102 y 103 se desprenden dos consecuencias:

En primer lugar, que la base imponible del Impuesto no coincide con cualquier valoración, sino que se corresponde con el coste de ejecución material de la obra, es decir, total de los costes asumidos menos determinados conceptos. La liquidación que se le presentó al reclamante tomó como base un valor, determinado por el artículo 239 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio. Dicho artículo determina un concepto alejado del de coste, y cercano al de valor real, medio o de mercado; (en el caso de viviendas de protección oficial, precio máximo vigente en el momento de comisión de la infracción; valor fijado para el inmueble a los efectos tributarios, efectos tributarios que fundamentalmente se refieren a tributos cuya base se determina por el valor real o de mercado del bien, o “valor” fijado previo informe técnico). La base imponible del ICIO se refiere a costes comprobados, y no a valores de mercado o medios.

En segundo lugar, que la liquidación que el Impuesto denomina “definitiva”, se ha de hacer mediante la oportuna comprobación administrativa. Esto implica la apertura de un procedimiento de comprobación limitada o, eventualmente, de inspección. En dichos procedimientos se debe de intentar obtener los medios de prueba del coste de la obra, y de abrir los períodos de alegaciones correspondientes. Es en el seno de dichos procedimientos, y de ser necesario, cuando se puede acudir a los medios de valoración de la base que establece el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, teniendo en cuenta que los medios de valoración se deben de referir a los costes incurridos.

En el sentido de las dos afirmaciones realizadas se manifiestan, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1999, (recurso 8746/1994); la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de junio de 2007, (recurso 291/2007), que indica

que la comprobación administrativa no puede sustituirse por la simple aplicación de índices o baremos, sino que debe de realizarse mediante una efectiva comprobación, o la del Juzgado de lo contencioso administrativo de Lérida de 20 de junio de 2013, (recurso 286/2011).

CUOTA LÍQUIDA.

Nº REA: 54/2013

Nº RESOLUCIÓN: 62/2014.

ASUNTO: ICIO

CONCEPTO: CUOTA LIQUIDA (BONIFICACIÓN).

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

En el presente caso se trata de determinar si la liquidación de ICIO se ajusta a derecho. El reclamante manifiesta que no se ha aplicado la bonificación de hasta el 95% por construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal que se solicitó con anterioridad. Sin embargo, por acuerdo del pleno del ayuntamiento se desestimó dicha solicitud, siendo correcta la liquidación practicada.

PRESCRIPCIÓN.

Nº REA: 23/2013

Nº RESOLUCIÓN: 20/2014.

ASUNTO: ICIO

CONCEPTO: PRESCRIPCIÓN.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El interesado manifiesta que el devengo del impuesto se produce con el inicio de las obras y, por tanto, se ha producido la prescripción puesto que se trata de obras anteriores a octubre de 2007. Sin embargo, en la documentación obrante en el expediente consta certificación técnica visada por el Colegio de Arquitectos de fecha 26 de junio de 2012, coincidente con el expediente de legalización de ampliación de vivienda unifamiliar aislada, no constando ningún documento que pudiera acreditar de forma fehaciente la realización y finalización con fecha anterior a octubre de 2007 de las obras señaladas. Es el art 105.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el que establece que en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.

En cualquier caso, en el propio expediente SAXXX/XXX se deja constancia de que los Servicios de Inspección Municipal del Departamento de Administrativo de Disciplina Urbanística, personados en el lugar de las obras con fecha X de X de 2010,

comprobaron que se estaban ejecutando obras de ampliación de vivienda. Siguiendo el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de septiembre de 2005, el hecho imponible de ICIO comienza a realizarse al iniciarse la ejecución de la obra y termina con su completa ejecución, momento en que la Administración, tras comprobar cuál ha sido su coste efectivo, puede girar la liquidación definitiva que proceda. Por tanto, el devengo se sitúa al finalizar las obras, que es el momento en el que cobra existencia el elemento material del hecho imponible.

Por tanto, se entiende que no se ha producido prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALIA).

HECHO IMPONIBLE.

Nº REA: 22/2013

Nº RESOLUCIÓN: 27/2014.

ASUNTO: IIVTNU.

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE. MOTIVACIÓN.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 104.1 y 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. De este modo, es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente, en las transmisiones a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Por lo demás, tal y como dispone el artículo 105.1 de la LGT, en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.

Nº REA: 171 y 172/2013.

Nº RESOLUCIÓN: 137/2014.

ASUNTO: IIVTNU.

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

En la presente reclamación se plantea si el inmueble en cuestión, por no tener la condición de urbanizable, se encuentra sujeto al IIVTNU. La propia norma establece que la naturaleza urbana del inmueble se regula por lo establecido en el IBI. Por su parte el IBI toma como definición de inmueble urbano lo establecido en la Ley del Catastro Inmobiliario.

EXENCIONES.

Nº REA: 4/2014

Nº RESOLUCIÓN: 104/2014.

ASUNTO: IIVTNU.

CONCEPTO: EXENCIÓN.

SENTIDO: PARCIALMENTE ESTIMATORIA.

El artículo 105.2.c) LRHL establece la exención del Impuesto para los incrementos cuando la obligación de satisfacer el tributo recaiga sobre "las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes". La ley 30/1994, de 24 de noviembre, antecedente de la actualmente vigente Ley 49/2002, derogó mediante su disposición derogatoria única la normativa que regulaba las hasta entonces denominadas entidades de beneficencia, que vienen a encuadrarse, en la actualidad, en el régimen de entidades sin fines lucrativos regulado por la Ley 49/2002.

La Ley 49/2002, de promulgación posterior a la Ley 3 establece en su artículo 15.3 que "estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos", y establece ciertas exigencias.

El artículo 15.4 determina que la aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos cumplan dos requerimientos: que comuniquen al ayuntamiento correspondiente el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo anterior, y que se dé el cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulado en el Título de la ley en el que el artículo se encuentra. En su número 5, que "lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones previstas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales".

El artículo 3 enumera los requisitos exigidos para la entrada y mantenimiento en el régimen especial, que son, muy brevemente, los siguientes: que persigan fines de interés general; que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 por 100 de una serie de rentas e ingresos; que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria; que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios; que los cargos

de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen; que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo; que estén inscritas en el registro correspondiente; que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen o, en su defecto, en el Código de Comercio y disposiciones complementarias; que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación específica; que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.

Por otra parte, el artículo 14.2 de la Ley de Mecenazgo determina que las entidades que soliciten el régimen especial quedan vinculadas a éste de forma indefinida en los períodos siguientes al de solicitud en tanto se cumplan los requisitos del artículo 3, y añade en el número 2 que la aplicación del régimen fiscal especial está condicionada al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por la entidad; (inciden en la necesidad de acreditación de los requisitos, entre otras, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, -Burgos-, de 21 de octubre de 2005, y del de Madrid 967/2912, de 14 de junio).

De acuerdo con lo que establece el artículo 108 de la LRHL, el devengo del Impuesto sobre Plus Valía se produjo el día 9 de marzo de 2013. Éste es el día en el que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se determinan las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria.

Consta en el expediente que la entidad solicitó el régimen especial, mediante certificación con validez hasta el de diciembre de 2013, pero condicionada al cumplimiento de los requisitos, que ha de ser demostrado por la entidad.

Consta también que la entidad estaba al corriente de la obligación de rendición de cuentas a de de 2008.

No consta, sin embargo, que a 9 de marzo de 2013 se cumplieran los requisitos que permiten la permanencia en el régimen especial al que se refiere el artículo 15 antes mencionado. Para poder ejercitar su derecho a la exención debe de probar que a fecha de de cumplía los requisitos correspondientes. A tal efecto, el Ayuntamiento debe de concederle el plazo correspondiente.

OTROS.

Nº REA: 29/2013

Nº RESOLUCIÓN: 32/2014.

ASUNTO: IIVTNU.

CONCEPTO: OTROS. CADUCIDAD.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El procedimiento se inicia con la presentación de la declaración, tal y como dispone el art 128 de la LGT. Dicho procedimiento debe finalizar en el plazo de seis meses contados desde la fecha anterior. Dado que entre la fecha de presentación de la declaración y la notificación de la liquidación practicada han transcurrido más de seis meses, se entiende caducado el procedimiento y deben ser anuladas las liquidaciones practicadas.

Nº REA: 137/2013

Nº RESOLUCIÓN: 70/2014.

ASUNTO: IIVTNU.

CONCEPTO: OTROS. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 17.4 LGT, “los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos frente a la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas”. El contribuyente por la operación de venta del día de de fue, con independencia de las relaciones privadas que entre él y las que entonces figuraron como adquirentes surgieran, y esto en función de lo dispuesto en el artículo 106.1 LRHL, que en su letra b) configura como contribuyente al transmitente. Por otra parte, la LGT, en su artículo 221, al regular la devolución de ingresos indebidos, se refiere al interesado, aunque el Reglamento General de Revisión, aprobado por el Real Decreto 520/2005, se refiera a los “obligados” como legitimados en su artículo 14. Los artículos 120.3 y 221.4 LGT también se refieren al “obligado” tributario. Además de lo anterior, el artículo 33.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, determina que “el tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos del obligado al pago”.

Ahora bien: todo lo anterior se tiene que interpretar a la luz de lo que disponen los artículos 97.2 LGT, que establece el carácter supletorio del Derecho Administrativo en cuanto a procedimientos, y 31.1.a) y 68 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común, a tenor de los cuales son interesados los que promuevan un procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, y como tales pueden solicitar el inicio del procedimiento en cuestión.

De acuerdo con lo manifestado, las Sentencias del TSJ del País Vasco 406/1995, de 5 de junio, del TSJ de Madrid 125/1997, de 11 de febrero, del TSJ de la Comunidad Valenciana 439/2000, de 2 de marzo y del TSJ de Andalucía, (Sevilla), de 12 de diciembre de

2002 han admitido la legitimación para reclamar del tercero que paga una deuda tributaria ajena, tanto por la asunción de tal obligación mediante pacto, como por la mera gestión de cobro; en este sentido, (ver la STSJ de la Comunidad Valenciana citada), la jurisprudencia estima que el tercero que paga por otro sí se subroga en la posición del obligado a los efectos de procedimiento administrativo y procesales.

El artículo 66.c) LGT establece que prescribe a los cuatro años el derecho a solicitar la devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, y el 67.c), que dicho plazo comienza a computarse el día en que la solicitud pudo realizarse. El auto del Tribunal Supremo que consolida nulidad de la situación que dió lugar al ingreso es de de de, y la solicitud de devolución, de de de, cuando el derecho aún no había prescrito.

El Impuesto sobre Plus Valía se devenga en el momento de la transmisión del terreno o la transmisión o constitución del derecho que constituye su objeto material; el artículo 109.2 LRHL establece que “cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna”.

La sentencia de la Audiencia Provincial determinó la nulidad del contrato por falta de causa, lo que implica que éste no produjo efectos, y no nació a la vida jurídica; es decir, que la transmisión que pretendía no se llegó a producir. Ordenó la escrituración a la sociedad de gananciales. Las adquirentes, por tanto, no llegaron a adquirir nada, y no parece que en la relación quedasen pendientes obligaciones de restitución no cumplidas. No hay, por tanto, ningún efecto lucrativo acreditado, porque su patrimonio quedó como en origen. Por otra parte la nulidad del contrato no devino de un incumplimiento entre contratantes. Además de lo anterior, y de acuerdo con lo que determina el artículo 31.3 de la Constitución Española, no se aprecia manifestación de capacidad económica que sirva de base al cobro de un tributo que, por otra parte, puede girarse de acuerdo con la nueva compraventa.

TASAS

HECHO IMPONIBLE.

NÚMERO DE RECLAMACIÓN: VARIAS.

NÚMERO DE RESOLUCIÓN: VARIOS.

ASUNTO: TASA PASADERAS.

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE. MOTIVACIÓN.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, establece en su artículo 77.1 que el uso común especial normal de los bienes de dominio público se sujetará a licencia. Por otra parte, la Ordenanza municipal de pasaderas en la vía pública, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 27 de septiembre de 1995, dispone en su artículo 1 que "a los efectos de esta Ordenanza se denomina pasadera el acceso de vehículos desde la vía pública al interior de los edificios, urbanizaciones, solares e instalaciones y viceversa, que constituye un uso común especial de los bienes de dominio público, y en consecuencia estará sujeto a licencia municipal, de acuerdo con las especificaciones contenidas en esta Ordenanza, así como al pago de los tributos e ingresos de derecho público que les sean de aplicación, según las disposiciones legales vigentes en cada momento". En su artículo 2, establece que "la licencia de pasadera comportará el establecimiento de las zonas definidas en el anexo a esta Ordenanza e igualmente llevará consigo la prohibición de estacionamiento frente a la misma con el carácter indefinido u horario que se conceda". En el artículo 3, que "las pasaderas se clasifican: 1.- en función de la duración. a.- Las pasaderas podrán concederse con carácter indefinido o temporal. Las primeras llevarán consigo la inclusión del titular en el Padrón Fiscal correspondiente en tanto que las pasaderas temporales comportarán un pago único en función de su duración..." Y en su artículo 8.7, que se podrán denegar las licencias solicitadas de pasaderas motivadamente y por motivos de seguridad del tráfico, especialmente el peatonal. Los artículos 10 y 14 determinan que, una vez concedida la licencia, procede la colocación de cuñas de hormigón armado y de la señalización vertical y horizontal correspondiente.

Por lo que respecta al ámbito tributario, la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Entradas de Vehículos a Través de las Aceras, Entrada y Circulación de Vehículos en Calles Peatonales y Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículo, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase, (en sus redacciones vigentes en los años 2010 a 2013), dispone en su artículo 1 que "el presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase... previsto en la letra h) del apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales". En el artículo 5, que regula la cuota tributaria, establece que "no se producirá la baja en el Padrón del tributo respecto a aquellas viviendas unifamiliares, edificios, naves o locales comerciales que tengan adscrita una o varias plazas de aparcamiento". Con respecto al devengo, dispone en el artículo 6.1 que "la tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción. Posteriormente el devengo tendrá lugar el día 1º de enero de cada año". Y el artículo 7, que regula la declaración e ingreso, que la obligación de contribuir por la presente tasa nace desde el momento del comienzo del aprovechamiento, exista o no autorización para ello, debiendo los sujetos beneficiarios solicitar la correspondiente licencia y darse de alta en el padrón una vez que sea concedida la licencia, efectuando el ingreso que corresponda para obtener el número de licencia municipal que constará en la placa normalizada al efecto. Que las bajas que se soliciten surtirán efecto en el período siguiente a su solicitud y conllevarán la retirada del disco de reserva de aparcamiento. Que cuando se conceda al peticionario cédula de habitabilidad de la vivienda que disponga de garaje o licencia de primera ocupación de edificios, naves o locales comerciales que se beneficien de la pasadera o de la reserva de espacio se practicará la liquidación correspondiente al interesado con incorporación inmediata al Padrón. Y que practicada la liquidación correspondiente al alta, el tributo se exaccionará con carácter periódico mediante la aprobación del correspondiente Padrón y se pondrá al cobro para ingreso en período voluntario en el plazo que para cada año se establezca".

Se deduce de lo anterior que el uso especial del dominio público que aquí se considera requiere, en primer lugar, una autorización administrativa o licencia, que implica la acreditación de que el lugar es apto para que los vehículos lo utilicen, el alta en un registro de control y además una señalización que sirve tanto al sujeto como a terceros o a razones de seguridad.

Con independencia de lo anterior se puede producir el devengo por la utilización del dominio público sin licencia; en este caso, con independencia de que se produce el hecho imponible y se devenga el tributo correspondiente, en su modalidad de uso indefinido o en la de uso puntual, la Administración tiene que proceder a regularizar la situación formal y la de señalización, además de a la apertura de los expedientes sancionadores que en su caso puedan corresponder.

Por lo que respecta a los pronunciamientos jurisprudenciales, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia 918/2007, de 11 de octubre, que confirma una del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de esta ciudad, parece decantarse por interpretar que la demostración efectiva del uso, o de la ausencia de éste, tiene un carácter determinante en cuanto a la exacción del tributo, y en sentido análogo cabe interpretar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 906/1999, de 31 de mayo, y 163/2001, de 31 de enero.

En los supuestos de uso indefinido la Tasa tiene el carácter de tributo periódico de cobro por recibo. La Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, establece en su artículo 102.3 que "en los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan", y en el punto 2 del mismo artículo, que la notificación de la liquidación, que por lo que hace referencia a esta reclamación se corresponde a la del alta en el registro, padrón o matrícula, debe de contener determinadas menciones, entre las cuales cabe destacar la de la motivación cuando no se ajuste a los datos consignados por el obligado tributario, con expresión de los hechos y elementos esenciales que la originen, así como de los fundamentos de derecho, o su carácter de provisional o definitiva.

Por otra parte, este Consejo sólo es competente para manifestarse en relación con la liquidación de las Tasas, no acerca de la obligatoriedad o no del vado y la inclusión o no en el Padrón, cuestión que debe de tramitarse ante la Policía Local.

Nº REA: 180/2012

Nº RESOLUCIÓN: 17/2014.

ASUNTO: TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Este Consejo no es competente para conocer en materia de infracciones y sanciones distintas de las tributarias. Ahora bien, como consecuencia de actuaciones de tráfico se ha producido el supuesto devengo de una tasa, y éste es un concepto tributario, independiente en su naturaleza y regulación material y formal de los conceptos relativos a la infracción y a la sanción, (sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 17 de enero de 1997 y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 1637/2002, de 16 de octubre). De acuerdo con lo que disponen los artículos 213.1 y 227 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 137.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, este Consejo es competente para conocer de reclamaciones contra los actos relativos a dicha tasa.

El Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece en su artículo 85.1.a) los supuestos en los que cabe la retirada de un vehículo de la vía pública: "Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público". Tales supuestos, junto al de solicitud del sujeto o acaecimiento de circunstancias imprevistas, son los únicos que legitiman para la retirada del vehículo, por lo que existen casos en los que, a pesar de cometerse una infracción, no procede dicha retirada. Los supuestos mencionados suponen el hecho imponible de la tasa, que no se puede considerar como la mera retirada, sino como la retirada legitimada por el ordenamiento. La Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Cartagena establece en su artículo 151 diversas conductas sancionables referidas al estacionamiento, y en concreto

en sus números 1, 7 y 15, referidas a locales y establecimientos dedicados a espectáculos públicos, dificultad de acceso normal a locales o edificios o calles urbanizadas sin aceras cuando no esté expresamente autorizado, y en su artículo 156.2 determina los supuestos en que puede procederse a la retirada del vehículo, entre ellos los mencionados anteriormente.

La Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Retirada de Vehículos de la Vía Pública establece en su artículo 1 que constituye el hecho imponible de la Tasa la retirada de vehículos de la vía pública por razones de urgencia, necesidad o seguridad.

Ahora bien: la retirada de un vehículo es un acto que supone una apropiación que priva de la utilización al titular. Por lo tanto, debe de ser considerada un último recurso, de acuerdo con lo que establece el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 339/1990, que se refiere a situaciones de peligro o perturbaciones "graves".

Por otra parte, la presunción de legalidad del acto administrativo se basa en la existencia y complitud del expediente que justifique la actuación. En los antecedentes de la retirada hay expresiones que se refieren a la imposibilidad de acceso, mientras que otras se refieren a la imposibilidad de utilización "normal". Se hace referencia en dichos antecedentes a que la parte delantera del vehículo obstaculizaba el acceso al café bar, pero no hay ninguna fotografía que permita apreciar la separación entre el vehículo y la puerta de acceso al local, (las de la parte delantera, que deberían de ser las más relevantes a los efectos de la retirada, se centran en primerísimos planos de la carrocería). En la primera fotografía, de la parte trasera, se aprecia que el número 3 de la matrícula parece situarse sobre la parte central de una línea gruesa blanca que parece hacer las veces de canal de desagüe o separación entre una zona y otra de la calle, y que parece marcar una especie de zona, en los laterales, de utilización ¿preferentemente? peatonal. No queda acreditado así, con el reportaje, hasta qué punto la posición del vehículo efectivamente impedía el acceso. El expediente administrativo, y en él las declaraciones que se incluyen, incluidas las de los Agentes, gozan de presunción de veracidad, pero dicha presunción es *iuris tantum*, (Sentencias del TSJ de Madrid 606/1998, de 1 de junio y 972/2001, de 4 de abril).

Del expediente se deriva, además de lo dicho hasta el momento, que el vehículo se encontraba estacionado en un lugar en el que no existía señalización vertical de prohibición, (así se expresa por la reclamante sin que la denuncia, el parte de retirada o los informes acrediten nada en contra), y precisamente entre dos líneas horizontales de prohibición, en el espacio que éstas dejan libre: una línea horizontal y recta y otra quebrada, de las utilizadas para señalar los vados. Ambas líneas se sitúan inmediatamente pegadas a las fachadas de las edificaciones. De acuerdo con esto, y si dichas líneas prohíben en sus ámbitos de delimitación el estacionamiento, no se entiende con facilidad qué es lo que sucede en el ámbito que ocupaba el vehículo, no afectado por la prohibición.

Por lo que se refiere a la obstaculización grave, de las fotografías que se incorporan al expediente, (el número 3 de la matrícula coincide con la línea blanca, y el modelo del vehículo

tiene una anchura de 1765mm), se deduce que entre el vehículo y las fachadas había una distancia aproximada de entre 60 y 70 centímetros, junto a una puerta de acceso exclusivamente peatonal. No se acredita, además, hasta qué punto el vehículo tapaba la puerta o sólo una parte.

Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia 818/2000, de 27 de septiembre, y 508/1998, de 23 de septiembre, constituyen como presupuesto para la admisión de la retirada del vehículo en los casos de estacionamiento indebido la existencia de una señalización clara e indudable y la obstaculización total o grave de la utilización del espacio público. En sentido análogo se manifiestan las sentencias del Tribunal superior de Justicia del País Vasco 79/2000, de 11 de febrero, y 286/2001, de 29 de marzo, que determinan que no procede la retirada del vehículo cuando se estaciona en una calle de dirección única y permite el tráfico, y cuando un vehículo se encuentra mal estacionado cerca de una esquina pero permite el giro de los demás. También la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 303/2000, de 3 de mayo, que desautorizó la retirada de un vehículo que ocupaba momentáneamente un lugar de carga y descarga, o la del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 595/2000, de 18 de septiembre, que hizo lo mismo con respecto a un vehículo estacionado en un lugar reservado, sobre la base argumental de que si el lugar era adecuado para el estacionamiento, lo que procedía era la sanción, pero no la retirada.

Por otra parte, como ponen de manifiesto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 972/2001, de 4 de abril, 803/2002, de 26 de julio y la del de Navarra 417/2000, de 22 de marzo, en materia de retirada de vehículos de la vía pública la complejidad, identidad de datos y acreditación del hecho concreto que motivó la retirada, (no la sanción), son determinantes.

El expediente no acredita, ni gráficamente ni por medio de las declaraciones de los sujetos actores, que son de contenido e interpretación diversa, que el vehículo impidiese el acceso al local.

Ahora bien. Existe también jurisprudencia que viene a asentar el principio de que el espacio público debe de estar disponible, de forma que las actuaciones de retirada de un vehículo no sólo se legitiman cuando existe una necesidad actual de utilización, sino cuando el lugar debe de estar disponible para una utilización hipotética; en este sentido, la STSJ de Madrid 256/1999, de 1 de marzo, referida a la retirada de un vehículo de una parada de taxis, la del TSJ de Navarra 1028/2000, por la retirada de un vehículo de una zona de carga y descarga que en el momento no se estaba utilizando, las SSTSJ de Madrid 86/1999 y 51/2002, de 21 de enero que sobre la base de que la retirada protege también la fluidez, legitiman la retirada de un vehículo que hacía más incómodo a los peatones cruzar la calle. La del TSJ de Cataluña 397/2000, de 3 de mayo, a tenor de la cual es admisible la retirada de un automóvil estacionado en un lugar reservado a motocicletas y, en el mismo sentido, la del TSJ de la Comunidad Valenciana 1637/2002, de 16 de enero, que se refiere a la protección de la disponibilidad del espacio reservado, se expresan en sentido análogo.

Todo lo anterior hace que a los efectos del devengo de la tasa, este Consejo haya llegado a la conclusión de que los Tribunales ponderan en cada caso los factores concretos de todo tipo, concurrencia en el lugar de peatones y tráfico, grado de incumplimiento generalizado, peligrosidad de la actuación, efectivo impedimento del acceso, etc. Cuando la prohibición está clara, (por señalización o delimitación clara entre la acera y la calzada), y queda acreditada la obstaculización y fundamentada la gravedad mediante el expediente, la retirada está legitimada. Por lo que respecta a este expediente, en primer lugar hay serias dudas acerca de la señalización de la zona de prohibición, y de la intensidad o gravedad de la perturbación causada, y de hasta qué punto ésta era grave y excepcional en el lugar; también, de los motivos de urgencia de la actuación. Todo lo anterior, con independencia de que el hecho se considere o no sancionable, dado que la retirada requiere no sólo la comisión de una infracción sino una situación de necesidad justificada

Nº REA: 45/2013

Nº RESOLUCIÓN: 28/2014.

ASUNTO: TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

En la presente reclamación se dirime si se ha producido el hecho imponible de la tasa por expedición de documentos. La ordenanza establece como hecho imponible la actividad administrativa desarrollada por la administración con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de documentos que expida la administración. Desde el momento de la recepción de la solicitud se dan los elementos que generan la realización del hecho imponible, convirtiéndose en sujeto pasivo de la tasa.

Nº REA: 42/2013

Nº RESOLUCIÓN: 51/2014.

ASUNTO: TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA.

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Se trata de determinar si en el presente supuesto se ha producido el devengo de la tasa por retirada de vehículos.

Establece el art. 85.1.a) del Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, los supuestos en los que cabe la retirada de vehículos de la vía pública: "siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público". Por tanto, habrá supuestos en los que, a pesar de cometerse la infracción, no proceda dicha retirada. Los supuestos mencionados suponen el hecho imponible de la tasa, que no se puede considerar como la mera retirada, sino como una retirada legitimada por el ordenamiento. La Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Cartagena

establece en su artículo 151 diversas conductas sancionables referidas al estacionamiento, y en concreto en su número 15, establece la prohibición de estacionar en las calles urbanizadas sin aceras y zonas peatonales y residenciales cuando no esté expresamente autorizado. Asimismo el art. 156 establece los supuestos en que puede procederse a la retirada del vehículo, entre ellos el mencionado anteriormente.

La Ordenanza reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Retirada de Vehículos de la Vía Pública establece en su artículo 1 que constituye el hecho imponible de la Tasa la retirada de vehículos de la vía pública por razones de urgencia, necesidad o seguridad. Por tanto, la retirada del vehículo debe ser considerada como un último recurso que evite perturbaciones graves o situaciones de peligro.

Por otra parte, la presunción de legalidad del acto administrativo se basa en la existencia y complitud del expediente que justifique la actuación. En el expediente el único argumento para la retirada es que se trata de zona residencial, no dejando testimonio gráfico que pudiera justificar la retirada del vehículo por motivos de urgencia, necesidad o seguridad.

Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia 818/2000, de 27 de septiembre y 508/1998, de 23 de septiembre, establecen como presupuesto para la admisión de la retirada de vehículo en casos de estacionamiento indebido la existencia de una señalización clara e indudable y la obstaculización total o grave de la utilización del espacio público. Por otra parte, como han puesto de manifiesto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 972/2001, de 4 de abril, y 803/2002, de 26 de julio, en materia de retirada de vehículos de la vía pública la complitud, identidad de datos y acreditación del hecho concreto que motivó la retirada del vehículo son determinantes. Todo ello con independencia de la infracción cometida y su correspondiente sanción.

Nº REA: 126/2013

Nº RESOLUCIÓN: 49/2014.

ASUNTO: TASA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA PUBLICA.

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

Este Consejo no es competente para conocer en materia de infracciones y sanciones distintas de las tributarias. Ahora bien, como consecuencia de actuaciones de tráfico se ha producido el supuesto devengo de una tasa, y éste es un concepto tributario, independiente en su naturaleza y regulación material y formal de los conceptos relativos a la infracción y a la sanción, (sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 17 de enero de 1997 y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 1637/2002, de 16 de octubre). De acuerdo con lo que disponen los artículos 213.1 y 227 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 137.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, este Consejo es competente para conocer de reclamaciones contra los actos relativos a dicha tasa.

El Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece en su artículo 85.1.a) los supuestos en los que cabe la retirada de un vehículo de la vía pública: "Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público".

La Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Retirada de Vehículos de la Vía Pública establece en su artículo 1 que constituye el hecho imponible de la Tasa la retirada de vehículos de la vía pública por razones de urgencia, necesidad o seguridad. La retirada de un vehículo es un acto que supone una apropiación que priva de la utilización al titular. Por lo tanto, debe de ser considerada un último recurso, de acuerdo con lo que establece el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 339/1990, que se refiere a situaciones de peligro o perturbaciones "graves".

Por otra parte, la presunción de legalidad del acto administrativo se basa en la existencia y complitud del expediente que justifique la actuación. El expediente administrativo, y en él las declaraciones que se incluyen, incluidas las de los Agentes, gozan de presunción de veracidad, pero dicha presunción es *iuris tantum*, (Sentencias del TSJ de Madrid 606/1998, de 1 de junio y 972/2001, de 4 de abril).

Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia 818/2000, de 27 de septiembre, y 508/1998, de 23 de septiembre, constituyen como presupuesto para la admisión de la retirada del vehículo en los casos de estacionamiento indebido la existencia de una señalización clara e indudable y la obstaculización total o grave de la utilización del espacio público. En sentido análogo se manifiestan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 79/2000, de 11 de febrero, y 286/2001, de 29 de marzo, que determinan que no procede la retirada del vehículo cuando se estaciona en una calle de dirección única y permite el tráfico, y cuando un vehículo se encuentra mal estacionado cerca de una esquina pero permite el giro de los demás. También la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 303/2000, de 3 de mayo, que desautorizó la retirada de un vehículo que ocupaba momentáneamente un lugar de carga y descarga, o la del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 595/2000, de 18 de septiembre, que hizo lo mismo con respecto a un vehículo estacionado en un lugar reservado, sobre la base argumental de que si el lugar era adecuado para el estacionamiento, lo que procedía era la sanción, pero no la retirada.

Por otra parte, como ponen de manifiesto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 972/2001, de 4 de abril, 803/2002, de 26 de julio y la del de Navarra 417/2000, de 22 de marzo, en materia de retirada de vehículos de la vía pública la complitud, identidad de datos y acreditación del hecho concreto que motivó la retirada, (no la sanción), son determinantes.

Ahora bien. Existe también jurisprudencia que viene a asentar el principio de que el espacio público debe de estar disponible, de forma que las actuaciones de retirada de un vehículo no sólo se legitiman cuando existe una necesidad actual de utilización, sino cuando el lugar debe de estar disponible para una utilización

hipotética; en este sentido, la STSJ de Madrid 256/1999, de 1 de marzo, referida a la retirada de un vehículo de una parada de taxis, la del TSJ de Navarra 1028/2000, por la retirada de un vehículo de una zona de carga y descarga que en el momento no se estaba utilizando, las SSTSJ de Madrid 86/1999 y 51/2002, de 21 de enero que sobre la base de que la retirada protege también la fluidez, legitiman la retirada de un vehículo que hacía más incómodo a los peatones cruzar la calle. La del TSJ de Cataluña 397/2000, de 3 de mayo, a tenor de la cual es admisible la retirada de un automóvil estacionado en un lugar reservado a motocicletas y, en el mismo sentido, la del TSJ de la Comunidad Valenciana 1637/2002, de 16 de enero, que se refiere a la protección de la disponibilidad del espacio reservado, se expresan en sentido análogo.

Todo lo anterior hace que a los efectos del devengo de la tasa, este Consejo haya llegado a la conclusión de que los Tribunales ponderan en cada caso los factores concretos de todo tipo, concurrencia en el lugar de peatones y tráfico, grado de incumplimiento generalizado, peligrosidad de la actuación, efectivo impedimento del acceso, etc. Cuando la prohibición está clara, y queda acreditada la obstaculización y fundamentada la gravedad mediante el expediente, la retirada está legitimada. Todo lo anterior, con independencia de que el hecho se considere o no sancionable, dado que la retirada no sólo se puede basar en la comisión de una infracción, sino en una situación de necesidad justificada.

Por lo que respecta a la presente reclamación, alega el reclamante que estacionó el vehículo el día , y se desprende del informe que el día de se celebró una prueba deportiva para cuya realización se señaló, con 48 horas de antelación, la prohibición de estacionamiento, es decir, el día de.

Establece la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena lo siguiente:

Artículo 144.- Se prohíbe la parada, además de los casos previstos en la legislación de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en los siguientes: a. En los lugares prohibidos reglamentariamente o señalizados por discos o marcas viales.

Artículo 151.- Queda prohibido el estacionamiento, además de los casos previstos en el artículo 144 de esta Ordenanza donde se prohíbe la parada, en los casos y lugares siguientes: 2) En un mismo lugar de la vía pública durante más de 5 días consecutivos. A los efectos expresados sólo se computarán los días hábiles.

En todo caso, el propietario del vehículo tendrá la obligación de cerciorarse, por sí o por cualquier otra persona o medio, de que su vehículo no se encuentra indebidamente estacionado como consecuencia de cualquier cambio de señalización u ordenación del tráfico.

Artículo 156.- Retirada del vehículo:

Los agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia del tráfico podrán ordenar la retirada de un vehículo de la vía y su traslado al depósito correspondiente, que indique la Autoridad Municipal:

3).- Cuando se encuentre estacionado en itinerarios o espacios que hayan de ser ocupados por una comitiva, procesión, cabalgata, prueba deportiva o actos públicos debidamente autorizados o señalizados.

Según las manifestaciones del reclamante, que se asumen como ciertas pero no están contrastadas, el vehículo estuvo estacionado desde el día de hasta el día de a las horas, es decir, 5 días. Pero es que sean cuales sean los días, la Ordenanza establece que la persona que estacione el vehículo deberá, en todo caso, estar atenta a cualquier cambio de señalización, por sí o por medio de otra. Consta en el expediente que se señaló con 48 horas de antelación, sin que se haya desvirtuado esta aseveración. De acuerdo con lo que dispone el artículo 156.3 de la Ordenanza citada, la retirada del vehículo fue justificada, y debida a la falta de seguimiento de la situación por el reclamante.

El devengo de la Tasa es independiente de la existencia o no de infracción, y de la suerte que corra el expediente sancionador, y se deriva de los datos que constan en esta Resolución y legitiman la retirada del vehículo.

Con respecto a la alegación del importe de la Tasa, se trata de una cuestión regulada en una disposición normativa, y este Consejo no tiene competencias para juzgar tales disposiciones, sino sólo para revisar la legalidad del acto en función de éstas. De acuerdo con lo que se establece en los artículos 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 213.1 y 227 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, y 137.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, este Consejo es competente para conocer de reclamaciones contra resoluciones, o contra actos de trámite en determinados casos previstos expresamente, pero no para conocer de reclamaciones contra Ordenanzas.

Nº REA: 141/2013

Nº RESOLUCIÓN: 74/2014.

ASUNTO: TASA VELADORES.

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

Como consecuencia del cambio de titularidad de la licencia para instalación de veladores, se produce el prorrateo de la cuota por los dos primeros trimestres. Sin embargo, el obligado tributario considera que no se ha producido el hecho imponible, ya que se encuentra de baja dicho local desde octubre de 2012. Se considera que se produce el hecho imponible de la tasa no solo por la utilización efectiva del dominio público local, sino por la expectativa de uso del dominio que se pueda producir y la reserva del mismo. En este caso, comunicada la renuncia el día 12 de junio de 2013 se prorratea la tasa por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 12 de junio, siendo correcta la liquidación practicada por los dos primeros trimestres del 2013.

Nº REA: 168/2013

Nº RESOLUCIÓN: 77/2014.

ASUNTO: TASA VELADORES.

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

Como consecuencia del cambio de titularidad de la licencia para instalación de veladores, se produce el prorrateo de la cuota por los tres primeros trimestres. Sin embargo, el obligado tributario considera que no se ha producido el hecho imponible, ya que se encuentra de baja en el IAE desde el año 2012. Se considera que se produce el hecho imponible de la tasa no solo por la utilización efectiva del dominio público local, sino por la expectativa de uso del dominio que se pueda producir y la reserva del mismo.

Nº REA: 38/2014

Nº RESOLUCIÓN: 147/2014.

ASUNTO: TASA. ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS POR RESIDENTES.

CONCEPTO: HECHO IMPONIBLE.

SENTIDO: PARCIALMENTE ESTIMATORIA.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 23.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son sujetos pasivos de las tasas municipales aquellos que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local. La ordenanza del Ayuntamiento de Cartagena referida a esta tasa y vigente para 2013, establece en su artículo 1 que el hecho imponible está constituido por la utilización o aprovechamiento del espacio público; en el 6, que el devengo se produce en el momento de estacionar el vehículo, o en el de la ocupación o reserva del espacio para tal fin. El 7. Segundo que en ciertos sectores podrán estacionar los residentes, previo pago de la tarjeta correspondiente, que se exigirá en régimen de autoliquidación por los medios que el propio artículo menciona. Por otra parte, configura un tributo de estructura periódica en lo que se refiere a la ocupación por residentes, configurando un período impositivo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo con lo anterior, parece que la tasa no se devenga, como otras, por la mera solicitud de la tarjeta de residente, sino por la ocupación efectiva, que requiere unos condicionantes legales. En el presente caso, se produjo la reserva, consciente por parte de los solicitantes, de la utilización del espacio público, reserva que se utilizó hasta el momento de la baja en el derecho. Establece el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, que cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se determine en la ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año, y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese de la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia

con el correspondiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal.

La disposición legal, en este caso, establece la norma de que en los casos de inicio de la actividad o de finalización, no procede el devengo por la totalidad, en adecuación al principio de capacidad económica. De acuerdo con lo anterior, y dado que es presumible que desde el día de dejó de tener derecho a la utilización, procede prorratear la cuota; dado que los 25 euros de cuota implican 365 días, procede, por tanto, la devolución de €

CUOTA ÍNTEGRA.

Nº REA: 26/2013

Nº RESOLUCIÓN: 30/2014.

ASUNTO: TASA VELADORES.

CONCEPTO: CUOTA INTEGRA.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

En la reclamación se dirime si es aplicable el recargo del 35% por aprovechamiento del vuelo de la vía pública. Consta en el expediente informe de la inspección de tributos en el que se informa de la existencia de toldos instalados en los dos establecimientos, aportando fotografías que acreditan lo manifestado. Por tanto, es correcta la aplicación del recargo cuestionado.

CUOTA LÍQUIDA.

Nº REA: 1/2014

Nº RESOLUCIÓN: 103/2014.

ASUNTO: TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DOMICILIARIO DE RECOGIDA DE BASURAS.

CONCEPTO: CUOTA LÍQUIDA. REDUCCIONES

SENTIDO: PARCIALMENTE ESTIMATORIA.

El Ayuntamiento ha girado un recibo al reclamante por importe de #€. El reclamante argumenta en su escrito de 4 de octubre que la Ordenanza de 2004, vigente según él, establece una cuota mensual de 18,23 euros, y que al estar situado el comercio en una pedanía, tiene derecho a reducciones.

La resolución del Ayuntamiento de 25 de noviembre no establece criterio alguno que fundamente la liquidación efecuada.

La Ordenanza vigente para la Tasa que interesa a este expediente es la de 2013. De acuerdo con ella:

Según el artículo 4.3, Punto 3.5, (comercio al por menor no contemplado en otros epígrafes; en pedanías), la cuota mensual es de 32,41€. Además, se dispone en el mismo artículo que en las actividades contempladas en los epígrafes 3 y 4, realizadas en playas, se aplicará una reducción del 35%.

El resultado de aplicar una cuota mensual de 32,41€, y reducirla en el 35%, es de 252,79€.

MOTIVACIÓN.

Nº REA: VARIOS

Nº RESOLUCIÓN: VARIOS.

ASUNTO: TASA PASADERAS.

CONCEPTO: MOTIVACIÓN.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

En los supuestos de uso indefinido la Tasa tiene el carácter de tributo periódico de cobro por recibo. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece en su artículo 102.3 que "en los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan", y en el punto 2 del mismo artículo, que la notificación de la liquidación, que por lo que hace referencia a esta reclamación se corresponde a la del alta en el registro, padrón o matrícula, debe de contener determinadas menciones, entre las cuales cabe destacar la de la motivación cuando no se ajuste a los datos consignados por el obligado tributario, con expresión de los hechos y elementos esenciales que la originen, así como de los fundamentos de derecho, o su carácter de provisional o definitiva. No se ha procedido de este modo en el presente caso.

OTROS.

Nº REA: 123/2013

Nº RESOLUCIÓN: 119/2014.

ASUNTO: TASA LICENCIA ACTIVIDAD.

CONCEPTO: OTROS. PROCEDIMIENTO.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El reclamante manifiesta como causa oponible la indefensión que se le produce al haber recibido directamente la liquidación, sin que esta contenga ningún tipo de motivación que ayude a determinar la cuota tributaria liquidada. El consejo considera como elemento esencial de cualquier procedimiento el trámite de audiencia donde se ponga de manifiesto el expediente y se le de plazo para presentar las alegaciones que el interesado considere oportunas.

RECAUDACIÓN (VOLUNTARIA Y APREMIO).

MOTIVACIÓN.

Nº REA: 43/2013

Nº RESOLUCIÓN: 71/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN (LIQUIDACIÓN).

CONCEPTO: MOTIVACIÓN.

SENTIDO: PARCIALMENTE ESTIMATORIA.

No constando en el expediente copia de las liquidaciones practicadas y notificadas que acrediten y motiven la cuantía girada a los ahora reclamantes, habiéndose sido solicitadas por este Consejo, y disponiendo tan sólo de la referencia informática, no parece a la vista de la documentación obrante en el expediente que hayan quedado suficientemente motivadas en su cuantía, debiendo procederse a la práctica de nuevas liquidaciones que acrediten los elementos esenciales de la liquidación, con el desglose de los conceptos y con la motivación suficiente conforme a lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

APREMIO.

Nº REA: 178/2013

Nº RESOLUCIÓN: 9/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. FRACCIONAMIENTO.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Según los arts. 44 y sgs. del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, (RGR), la tramitación del expediente de fraccionamiento debe de ser:

1.- solicitud, art. 46.

2.- valoración por parte del órgano competente del grado de dificultad del obligado y de la suficiencia de la garantía ofrecida, Art. 51.

3.- Requerimiento, en su caso, para completar o sustituir garantías, Art. 48.4.

4.- Formulación de una propuesta de resolución a la Junta de Gobierno Local.

5.- Resolución de la solicitud de fraccionamiento, Art. 52.

Formalización de la garantía ofrecida en dos meses a contar desde la notificación de la concesión del aplazamiento, Art. 48.6.

Así pues:

La suficiencia de la garantía debería de haberse analizado con carácter previo a la concesión del fraccionamiento, Art. 51.1 RGR.

Ante la insuficiencia debería de haberse requerido aportación de garantías complementarias, Art. 48.4.

La Junta de Gobierno concedió un plazo de 30 días, cuando el art. 48.6 impone un plazo de dos meses.

La lógica del RGR es que el obligado tiene un plazo de 2 meses desde que ya se ha notificado la resolución favorable de concesión del aplazamiento. El art. 48.6 dice que la garantía debe de formalizarse en dos meses porque según el art. 51.1, previamente se tiene que haber considerado suficiente la garantía como paso previo para aprobar el fraccionamiento.

Nº REA: 144/2013

Nº RESOLUCIÓN: 10/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

Como causa de oposición al apremio se alega la baja definitiva del vehículo, circunstancia que no se encuadra en ninguno de los motivos de oposición al apremio. sin perjuicio de lo anterior, la cuota del impuesto debe prorratearse por trimestres naturales dado que se ha producido la baja definitiva del vehículo

Nº REA: 145/2013

Nº RESOLUCIÓN: 10/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El reclamante manifiesta como causa oponible al apremio que se presentó recurso contra la sanción medioambiental y que no ha recibido resolución. En el expediente hay constancia de que el recurso interpuesto se resolvió con estimación parcial del mismo. No obstante, se considera que no se trata de ninguna de las causas de oposición al apremio del art 167.3, desestimándose la reclamación

Nº REA: 152/2013

Nº RESOLUCIÓN: 12/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El reclamante manifiesta como causa oponible al apremio que se presentaron alegaciones contra la propuesta de multa de tráfico y que no ha recibido resolución. De las alegaciones realizadas por el reclamante en su escrito no se observa que se produzca alguna de las causas de oposición al apremio, considerándose correcto el acto administrativo impugnado. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que en la documentación obrante en el expediente remitido

por la Unidad Administrativa de Sanciones y Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Cartagena consta propuesta de resolución desestimando las alegaciones realizadas, notificada al interesado el 1 de octubre de 2012.

Nº REA: 158/2013

Nº RESOLUCIÓN: 26/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT), el plazo de interposición de las reclamaciones económico administrativas es de un mes desde el día siguiente a la notificación del acto a impugnar o desde el del transcurso del plazo de silencio administrativo. En términos análogos se establece el plazo de la interposición del recurso de reposición en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Transcurridos los plazos sin la interposición de recurso o reclamación, los actos devienen firmes y, por lo tanto, inatacables. Así pues, son firmes la liquidación notificada el de de y la providencia de apremio notificada el de de . De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 239.4.b LGT se impone la inadmisión de la reclamación en lo que respecta a la impugnación de la cuota y a la de la providencia de apremio.

La reclamación que ahora se resuelve sólo puede estar en plazo para impugnar el embargo realizado el de , por €, entendiéndose que la solicitud de de cumplió la función de un recurso de reposición contra éste, y la reclamación se ha interpuesto transcurrido el plazo de silencio administrativo.

Procede, por tanto, la admisión a trámite de la reclamación en lo que respecta al embargo practicado el de .

El procedimiento de impugnación de los actos de apremio tiene causas tasadas por la Ley, como corresponde a la naturaleza del apremio, procedimiento no cognitivo que no puede entrar en cuestiones de fondo, por lo que, salvo casos de nulidad radical del acto a ejecutar, sólo cabe entrar a conocer de las causas que se establecen de forma expresa por la Ley. La Ley General Tributaria establece en su artículo 170.3 que contra la diligencia de embargo sólo pueden oponerse los siguientes motivos: a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. b) Falta de notificación de la providencia de apremio. c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley, y d) Suspensión del procedimiento de recaudación. Ninguna de estas causas se dan en este expediente.

Cuestión distinta de lo anterior es que se llegue a rectificar la liquidación por la ocupación del dominio público, cuestión sobre la que, como se ha dicho, no puede entrar a conocer el Consejo en esta fase del procedimiento. Dicha rectificación legitimaría la devolución del exceso.

Nº REA: 147/2013

Nº RESOLUCIÓN: 29/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: SATISFACCIÓN EXTRAPROCESAL PARCIAL. EL RESTO DESESTIMATORIA.

El reclamante manifiesta que el inmueble por el que se le reclama el IBI en periodo ejecutivo no es de su titularidad desde 2010, circunstancia que ha quedado probada en el expediente, siendo resuelta por satisfacción extraprocesal por los ejercicios 2011 y siguientes. Por lo que respecta a la deuda por el IVTM del ejercicio 2013, consta que el reclamante es titular del vehículo hasta 4 de marzo de 2013, fecha en la que se produce la transferencia del vehículo, siendo por tanto titular del mismo a la fecha de devengo del impuesto para el ejercicio 2013, esto es el 1 de enero de 2013.

Nº REA: 164/2013

Nº RESOLUCIÓN: 34/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El interesado mantiene como causa oponible al apremio la falta de notificación de la sanción de tráfico. En la documentación obrante en el expediente consta ejemplar de denuncia de fecha 22 de febrero de 2013, apareciendo en la casilla de firma el siguiente texto manuscrito por el agente: "manifiesta no querer firmar y que se la van a quitar en el Ayuntamiento; no quiere copia". Existe informe, emitido por la Jefa de la Unidad Administrativa de Sanciones de tráfico y Ocupación de Vía Pública, que considera que el Agente de la Autoridad, de conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, formuló denuncia que se considera notificada en el acto al interesado. En este sentido, el art 59.4 de la Ley 30/92, establece que cuando el interesado rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. Por su parte, el artículo 81.5 de la Ley 18/2009 de Seguridad Vial establece que al no efectuarse alegaciones dentro del plazo previsto contra el acuerdo de inicio, este surte efecto de acto resolutorio, lo que implica la terminación del procedimiento sin que sea preceptivo dictar resolución sancionadora.

De todo lo anterior se desprende que la sanción de tráfico se considera correctamente notificada, no concurriendo ningún motivo de oposición al apremio de los establecidos en el artículo 167.3 de la Ley General Tributaria.

Nº REA: 36/2014

Nº RESOLUCIÓN: 46/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El interesado mantiene como causa oponible al apremio la prescripción de la deuda apremiada. En este sentido, se aplica la sentencia del Tribunal Supremo en interés de Ley, de 9 de abril de 2003, el que fija la siguiente doctrina legal: “El artículo 76 de la Ley 39/1988 ha de ser interpretado en el plano de la responsabilidad, por lo que el nuevo titular adquirente, como sucesor del anterior sujeto pasivo, lo ha de ser con todas sus consecuencias, tanto si le favorecen como si le perjudican, entendiéndose, en consecuencia, que no han prescrito para el adquirente las deudas del IBI que tampoco habían prescrito para el sujeto pasivo, y que, asimismo, los actos interruptivos de la prescripción para con el sujeto pasivo pueden oponerse eficazmente contra el nuevo titular adquirente”.

Por tanto, no existe prescripción de la deuda apremiada y, por tanto, no hay motivo de oposición al apremio.

Nº REA: 5/2014

Nº RESOLUCIÓN: 61/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. EMBARGO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

A pesar de que las providencias de apremio se refieren a más conceptos, el escrito de reclamación económico administrativa parece impugnar el constituido por la Tasa de Licencia de Apertura. Consta informe en el que se acredita la notificación de ésta, y basta con repasar los hechos para concluir en que ha sido notificada en varias ocasiones. El de de 2010 se notificó la providencia de apremio por este concepto, y a partir de ahí comenzó el plazo de impugnación de un mes. No consta impugnación alguna, por lo que el acto de apremio es firme. Lo mismo cabe decir de los demás conceptos apremiados. Las notificaciones subsiguientes a la primera, tanto de apremio, (aquellas en las que consta un asterisco junto al concepto y la cantidad), como de embargo, cumplen la función de interrumpir el cómputo de la prescripción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.2.a) LGT, según el cual la prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago se interrumpe por cualquier actuación de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria. Así pues, la deuda es firme y no está prescrita.

Contra el embargo notificado el día de no caben más motivos de oposición que los previstos en el artículo 170.3 LGT: extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, falta de notificación de la providencia de apremio, incumplimiento de las normas reguladoras del embargo o suspensión del procedimiento de

recaudación. No se ha acreditado que en el momento de la actuación administrativa se hubiera producido ninguna de estas circunstancias.

Por lo que respecta a la solicitud de suspensión, establece el artículo 233.1 LGT que ésta se produce automáticamente cuando se garantice el importe del acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder, y no consta que dicha garantía se haya constituido. Por lo que respecta a la alegación de la producción de daños de difícil o imposible reparación, el art. 233.4 LGT establece la posibilidad de suspensión de la ejecución del acto recurrido con dispensa total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que aprueba el Reglamento General de Revisión, establece en su art. 46 que el Tribunal Económico-Administrativo que conozca de la reclamación contra el acto cuya suspensión se solicita, será competente para tramitar y resolver las peticiones de suspensión con dispensa total o parcial de garantía que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación. Asimismo, el Reglamento del Consejo Económico Administrativo de Cartagena contempla en su art. 19 que “a la solicitud de suspensión se acompañarán las garantías exigidas por la normativa vigente salvo las excepciones de dispensa de garantía, por incurrir el acto en error aritmético, material o de hecho, por la imposibilidad de aportarlas y que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación a juicio del Consejo”. Esta modalidad de suspensión tiene un carácter especial frente al general de suspensión con aportación de garantías. El artículo 40.2.c) del Reglamento de Revisión determina que, junto con la solicitud de suspensión se debe aportar necesariamente la documentación que acredite que la ejecución del acto puede ocasionar daños de difícil o imposible reparación, documentación que acredite los datos de hecho que constituyen la situación en la que se podrían ocasionar los daños. En el supuesto que nos ocupa el reclamante se limita a mencionar genéricamente la posibilidad de que se produzcan tales daños, y del expediente no se deriva ningún elemento que impida que el hipotético daño no se pueda subsanar posteriormente. Por otra parte, al escrito no se adjuntan documentos que acrediten la imposibilidad de garantizar la deuda para obtener la suspensión.

Como consecuencia de la renuncia a la licencia de obras se procede a la anulación de la liquidación de ICIO que estaba pendiente de pago. La anulación de la liquidación principal, ha llevado a la emisión de acuerdo donde se anula la liquidación principal y el recargo de apremio que generó la falta de ingreso en periodo voluntario, pero no los intereses de demora generados por el retraso, lo que ha generado nueva liquidación, que ha devenido firme y consentida por el transcurso del tiempo. Por tanto, no se da el motivo de oposición del art 170.3 de la LGT, extinción de la deuda, alegado por el reclamante, al existir liquidación firme.

Nº REA: 162/2013

Nº RESOLUCIÓN: 63/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. EMBARGO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

Como consecuencia de la renuncia a la licencia de obras se procede a la anulación de la liquidación de ICIO que estaba pendiente de pago. La anulación de la liquidación principal, ha llevado a la emisión de acuerdo donde se anula la liquidación principal y el recargo de apremio que generó la falta de ingreso en periodo voluntario, pero no los intereses de demora generados por el retraso, lo que ha generado nueva liquidación, que ha devenido firme y consentida por el transcurso del tiempo. Por tanto, no se da el motivo de oposición del art 170.3 de la LGT, extinción de la deuda, alegado por el reclamante, al existir liquidación firme.

Nº REA: 159/2013

Nº RESOLUCIÓN: 68/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN. APREMIO.

CONCEPTO: EMBARGO.

SENTIDO: SATISFACCIÓN EXTRAPROCESAL Y DESESTIMATORIA EL RESTO.

Como único motivo de oposición al embargo comunica que el inmueble por el que se le reclama la deuda fue entregado en dación en pago de deudas a una entidad bancaria. En la escritura se hacia constar que se hacia cargo de la deuda por IBI. Constatado que dicha deuda ha sido sufragada, solo queda manifestarse sobre el resto de la deuda embargada. No existiendo motivo de oposición al embargo de los contemplados en el art. 170.3 de la LGT, se desestima la reclamación.

Nº REA: 163/2013

Nº RESOLUCIÓN: 67/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. EMBARGO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El procedimiento de apremio es no cognitivo, y en él sólo se puede conocer de las causas que establecen, frente al apremio, el artículo 167.3, y frente al embargo, el art. 170.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT). Existe en el expediente acreditación de que los procedimientos sancionadores no están afectados por causa de nulidad o anulabilidad, y en función de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, este Consejo no es competente sino para decidir en cuestiones susceptibles de reclamación económico administrativa, y por lo tanto no en cuestiones relacionadas con infracciones del régimen de utilización de la vía pública.

Por lo que respecta a la alegación de prescripción, no se deduce de los hechos la prescripción de crédito alguno de la

Administración, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 66 a 68 LGT; si la alegación es de caducidad de los expedientes sancionadores, tampoco se deriva ésta de lo que el reclamante ha fundamentado o acreditado, pues se limita a alegarla genéricamente sin demostrar los hechos en que basa su afirmación, además de que, como se ha dicho, existe en el expediente acreditación de la corrección del procedimiento sancionador.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.3 LGT, los obligados tributarios deben de notificar a la Administración su cambio de domicilio, y las actuaciones correctamente llevadas a cabo por la Administración en los domicilios anteriores surten plenos efectos en tanto dicho cambio no haya sido formalmente notificado en la forma reglamentariamente establecida.

Los últimos actos notificados fueron el embargo, el ** de ***, recurrido en reposición el ** de ***, y el apremio de ** de septiembre, recurrido en reposición el **, y aunque existe una sola reclamación económico administrativa, formulada el ** de ***, el Consejo entiende que debe de entrar a conocer de las cuestiones que plantean tanto el embargo como la providencia de apremio; en el primer caso por interposición de la reclamación en situación de silencio administrativo, y en el segundo por interposición en el plazo de un mes desde el plazo de dicho silencio.

Se plantean así dos análisis de legalidad.

Uno referido a la actuación de embargo. Establece el artículo 170.3 LGT que contra la diligencia de embargo sólo se pueden alegar los siguientes motivos de oposición: extinción o prescripción de la deuda o el derecho a exigir el pago; falta de notificación de la providencia de apremio; incumplimiento de las normas reguladoras del embargo, o suspensión del procedimiento de recaudación. De acuerdo con lo que se ha expuesto, no existe constancia de prescripción del derecho a ejercitar el cobro. Por otra parte la Administración notificó o intentó notificar válidamente, por el procedimiento correcto y en el domicilio correcto, pues el reclamante no ha realizado cambio formal de domicilio ante la Administración, y la primera vez que hizo constar como domicilio el de **** fue el ** de ****, dándose la circunstancia de que la notificación del día ** de **** en la calle *** fue perfectamente recibida. Por otra parte, y con el fin de comprobar el respeto a los derechos del reclamante en el ejercicio del embargo de la cuenta corriente, el Consejo intentó notificar al reclamante el plazo para que acreditara la situación de su cuenta, en el domicilio de ****, en abril, sin éxito. Así pues, las notificaciones, o los intentos, han sido correctos, no existe prescripción y las normas del embargo parecen haberse respetado, porque nada se desprende del expediente ni se acredita por el reclamante en contra. No se alega ni existe suspensión del procedimiento.

Por lo que respecta al apremio, este Consejo considera que las providencias notificadas son firmes, y que la única susceptible de reclamación, a la que se refiere esta Resolución, es la notificada el ** de ***, (número de actuación ****): sólo el apremio de los * conceptos de 80€ cada uno, (***) notificados en apremio por primera vez estaba en plazo de impugnación cuando se interpuso la reclamación, y sólo a estos * conceptos se refiere la presente

Resolución; los anteriores ganaron firmeza en sus respectivos plazos. Las causas de oposición al apremio son igualmente tasadas, según establece el artículo 167.3 LGT: extinción o prescripción, solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, falta de notificación de la liquidación, anulación de ésta, o error en el contenido de la providencia que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. No se aprecia, en función del expediente, la concurrencia de ninguna de estas causas.

Nº REA: 170/2013

Nº RESOLUCIÓN: 72/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 25, 1, 2 y 6 del Reglamento General de Revisión en materia tributaria, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. La solicitud de suspensión con aportación de garantías suspenderá el procedimiento de recaudación, y si se aporta garantía bastante, la suspensión se entenderá acordada desde la fecha de la solicitud. La solicitud se realizó en período voluntario de ingreso, y acreditando el derecho a la suspensión. Dado que no se ha notificado acuerdo en contra, y en función de lo dispuesto en el artículo 25.10 del Real Decreto 520/2005, a tenor del cual, "si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontrara en período voluntario de ingreso, con la notificación de su denegación se iniciará el plazo previsto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para que dicho ingreso sea realizado", no se ha iniciado aún el plazo para el ingreso en período voluntario, y de acuerdo con el art. 161.1 LGT tampoco el ejecutivo. Lo anterior fundamenta el hecho de que según el artículo 62.1.e de la Ley 30/1992, la providencia de apremio sea nula de pleno derecho, lo que permite la alegación en la vía ejecutiva de la causa contemplada en el artículo 167.3.d, in fine de la LGT: "otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación".

Nº REA: 8/2014

Nº RESOLUCIÓN: 79/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El reclamante manifiesta como causa oponible al apremio la falta de notificación en voluntaria de la deuda apremiada, siendo su primera noticia la notificación de la providencia de apremio. Comprobado el expediente se observa que se han realizado los intentos preceptivos de notificación, antes de su publicación en el TESTRA, no existiendo motivo de oposición al apremio.

Nº REA: 30/2014

Nº RESOLUCIÓN: 90/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. NOTIFICACIÓN EN VOLUNTARIA.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

Este Consejo no es competente para entrar a conocer de cuestiones que se relacionen con el expediente sancionador, y en especial por lo que se refiere a este caso con la aportación de pruebas o la identificación del denunciante. Sólo entra a conocer de cuestiones relacionadas con el procedimiento de apremio.

El artículo 167.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT), establece que el procedimiento de apremio sólo admite la alegación de causas tasadas: extinción o prescripción de la deuda, solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, falta de notificación de la liquidación, anulación de ésta, o error u omisión en el contenido de la providencia que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. De éstas sólo parece alegable en este asunto la que hace referencia a la ausencia de notificación. El artículo 48.3 LGT dispone que los obligados tributarios deben de comunicar su domicilio y los cambios de éste a la Administración, de forma que la ausencia de cumplimiento de esta formalidad implica la validez de las actuaciones llevadas a cabo en el domicilio que a la Administración le conste. Del expediente se deduce que la Administración intentó la notificación de forma válida de las sanciones en el domicilio que a ella le constaba, y a continuación notificó por edictos, con lo que cumplió con las normas establecidas.

Nº REA: 72/2014

Nº RESOLUCIÓN: 91/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. NOTIFICACIÓN EN VOLUNTARIA.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT), establece que en los tributos de cobro periódico por recibo será suficiente la publicación de las fechas de ingreso por edictos de las cuotas posteriores a la primera, pero que esta primera debe de ser notificada de forma fehaciente. Por otra parte, el artículo 112.1 determina que, cuando se intente la notificación por dos veces y no sea posible por ausencia del sujeto, se citará al interesado para su notificación por comparecencia por medio de anuncios. A partir de la publicación, el interesado podrá comparecer para darse por notificado en quince días naturales, y si no lo hace se le tendrá por notificado desde el siguiente.

El plazo de ingreso para las liquidaciones realizadas por la Administración se computa, según el artículo 62.2, desde la fecha de la notificación. De acuerdo con el artículo 161, el período ejecutivo comienza al día siguiente de la finalización del plazo voluntario de ingreso.

No consta en el expediente que se intentara la notificación por comparecencia en el procedimiento voluntario. De acuerdo con esto, procede estimar la alegación de falta de notificación de la liquidación como causa de impugnación de la providencia de apremio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 167.3.c) LGT.

Nº REA: 9/2014 y 44/2014

Nº RESOLUCIÓN: 95/2014 Y 138/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. EMBARGO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El Consejo Económico Administrativo de Cartagena es competente para conocer de las reclamaciones que versen sobre sanciones no tributarias en vía de apremio, cabe indicar no obstante que el plazo para la interposición de la reclamación ha de ser conforme a lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Consta en el expediente notificación de diligencia de embargo contra el reclamante. Entrando a conocer por economía procesal sobre la posible oposición al embargo, resulta necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 170 de la LGT referido a los motivos admisibles de oposición a la misma. De este modo, sólo resultan alegables: a) la extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago; b) la falta de notificación de la providencia de apremio; c) el incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta Ley; y d) la suspensión del procedimiento de recaudación. No acredita el recurrente la concurrencia de ninguna de las causas de oposición previstas en la normativa por lo que no cabe su estimación.

Nº REA: 28/2014

Nº RESOLUCIÓN: 100/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El reclamante manifiesta como causa oponible al apremio la falta de notificación en voluntaria de la deuda apremiada, siendo su primera noticia la notificación de la providencia de apremio. Comprobado el expediente se observa que se han realizado los intentos preceptivos de notificación, antes de su publicación en el TESTRA, no existiendo motivo de oposición al apremio.

Nº REA: 18/2014

Nº RESOLUCIÓN: 106/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. (NOTIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN).

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, establece en su artículo 78.1 que las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial y, en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure en los registros de la Dirección General de Tráfico, se practicarán en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite. También indica en su artículo 92. 1 que el plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley es de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves, comenzando a contar los plazos a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido. Indica también el apartado 2 del mismo precepto que la prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio. También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78 (notificación tablón edictal Testra). Señala también el artículo 81.2 del mismo cuerpo normativo, referido al procedimiento sancionador que en el supuesto de que no se hubiese producido la detención del vehículo, el titular, el arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de quince días naturales para identificar al conductor responsable de la infracción contra el que se iniciará el procedimiento sancionador. De acuerdo con lo expuesto, y de los datos obrantes en el expediente, no pueden entenderse estimadas las pretensiones del recurrente.

Nº REA: 33/2014

Nº RESOLUCIÓN: 107/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El procedimiento de apremio es no cognitivo, y en él sólo se puede conocer de las causas que establecen, frente al apremio, el artículo 167.3, y frente al embargo, el art. 170.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT). Existe en el expediente acreditación de que los procedimientos sancionadores no están afectados por causa de nulidad o anulabilidad, y en función de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, este Consejo no es competente para decidir en cuestiones relacionadas con infracciones y sanciones relativas al régimen de utilización de la

vía pública, como las que en este expediente han dado lugar al apremio, sino sólo de las susceptibles de reclamación económico administrativa.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT), el plazo de interposición de las reclamaciones económico administrativas es de un mes desde el día siguiente a la notificación del acto a impugnar o desde el del transcurso del plazo de silencio administrativo. En términos análogos se establece el plazo de la interposición del recurso de reposición en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Transcurridos los plazos sin la interposición de recurso o reclamación, los actos devienen firmes y, por lo tanto, inatacables. Así pues, son firmes todas las actuaciones notificadas antes del de de .

Por lo que respecta a las notificadas dicho día y el de de , y con independencia de que la reclamante aporta justificantes de denuncia con referencias distintas, este procedimiento sólo puede entrar a conocer de las actuaciones de cobro que se notificaron por primera vez en las fechas señaladas, únicas que no han ganado firmeza.

De la documentación del expediente resulta que son las siguientes, (derivadas de las providencias de apremio notificadas los días de de y de de); se hace constar el expediente, el número de ticket y la fecha de la denuncia.

.....

El artículo 167.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT), establece que el procedimiento de apremio sólo admite la alegación de causas tasadas: extinción o prescripción de la deuda, solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, falta de notificación de la liquidación, anulación de ésta, o error u omisión en el contenido de la providencia que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. No se aprecia en el expediente que se de ninguna de las causas mencionadas.

Nº REA: 31/2014

Nº RESOLUCIÓN: 108/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El reclamante manifiesta como causa oponible al apremio la prescripción de la deuda apremiada, así como la falta de firmeza de la liquidación apremiada. Comprobado el expediente se observa que se han realizado la notificación de forma correcta, no existiendo motivo que ocasione la prescripción de la deuda apremiada. Asimismo la notificación mediante publicación edictal en el tablón edictal de sanciones de tráfico ha sido correcta.

Nº REA: 42/2014

Nº RESOLUCIÓN: 109/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El reclamante manifiesta como causa oponible al apremio la falta de notificación en voluntaria de la deuda apremiada, siendo su primera noticia la notificación de la providencia de apremio. Comprobado el expediente se observa que se han realizado los intentos preceptivos de notificación, antes de su publicación en el TESTRA, no existiendo motivo de oposición al apremio.

Nº REA: 43/2014

Nº RESOLUCIÓN: 110/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

El procedimiento de apremio es un procedimiento ejecutivo y no cognitivo, sin controversia y unilateral; esto es, se dirige a hacer efectivo el ingreso, no a conocer la existencia, procedencia ni cuantía de éste, que ya habrán sido previamente establecidas mediante los procedimientos correspondientes. No cabe por tanto, en esta fase de apremio conocer sobre la deuda para impugnar acerca de su adecuación a derecho, salvo, claro está, los motivos relacionados con la falta de procedencia del propio procedimiento de apremio, previstos en el artículo 167.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

Nº REA: 22/2014

Nº RESOLUCIÓN: 114/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. DILIGENCIA DE EMBARGO. NOTIFICACIÓN.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

De acuerdo con lo que se desprende de los hechos, la resolución se ciñe a la revisión de legalidad de la actuación notificada el día ***, por importe de €, dado que las anteriores actuaciones son firmes, y no se acredita el carácter ganancial de la cuenta afectada por la diligencia notificada en marzo.

Por otra parte, Don *** impugna su propia notificación sobre la base de que no se ha efectuado notificación también a su esposa. Pretende así la invalidez de todo el procedimiento de embargo sobre la base de que sólo se ha notificado a uno de los interesados.

Es cierto que el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece en su número 1 que cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación. Y añade que efectuado el embargo de los bienes o derechos, la

diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos. Y en sentido similar se expresa el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Por otra parte, establece en su número 3 que contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. Falta de notificación de la providencia de apremio. Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en la ley. Suspensión del procedimiento de recaudación.

Se deduce de lo anterior que se impugna la actuación en función de la causa consistente en el incumplimiento de las normas reguladoras del embargo, por falta de notificación.

De la situación producida se pueden concluir dos cosas distintas:

En primer lugar, que la deuda que originó el procedimiento de apremio es ganancial, según lo dispuesto en los artículos 1347 y 1361 del Código Civil, y por tanto la cuenta embargada, como ganancial, responde de dichas deudas, en función de lo que establecen el artículo 1362 y el 1367. Por otra parte, la asunción del pago de un tributo, o de una sanción, es un gasto de aquellos a los que ha de hacer frente la sociedad de gananciales y para el que es suficiente el consentimiento de uno de los cónyuges. Todo lo anterior sin perjuicio de la obligación de información entre los cónyuges de las eventualidades que afecten a la sociedad conyugal.

Si no se admitiera lo anterior, y la deuda no se entendiera como de la sociedad de gananciales, y dado que la norma se refiere a la notificación al cónyuge en caso de embargo de bienes gananciales, se puede entender que Doña *** podía haber ejercido su derecho de impugnación, pero no es esto lo que sucede en este expediente, porque reclama precisamente el sujeto a quien se notificó, sin acreditar representación de su cónyuge.

La Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación establecen la obligación de notificar a terceros junto con la de notificar al cónyuge, pero en un contexto del que se puede deducir que dicha obligación procede cuando de una deuda privativa, o ajena, responde una cuenta de cotitulares, o ganancial; y dicha notificación no subroga a los terceros notificados en la posición impugnatoria del deudor, sino que se prevé para que puedan hacer valer su mejor derecho, por tercerías u otra razón, o proteger su parte de patrimonio afectada.

Es decir: si el acto se lleva a efecto a la sociedad, ésta está notificada, y ha impugnado, y si se entiende que la deuda no es de la sociedad, cosa que no se prueba, no es el reclamante el legitimado para impugnar.

Nº REA: 173/2013

Nº RESOLUCIÓN: 118/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. (EMBARGO).

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Aunque el artículo 167. 3 de la Ley 58/2003, General Tributario, prevé causas tasadas de oposición al apremio, esta circunstancia ha de ser conjugada, tal y como ha reiterado la propia jurisprudencia, con la apreciación de circunstancias que pueden invalidar el acto originario cuya tutela pretende el procedimiento, y que tengan tal gravedad o significación que causen nulidad radical o supongan inseguridad jurídica. De este modo, se ha admitido por ejemplo la nulidad de la providencia de apremio cuando el apremiado no sea el sujeto pasivo del impuesto, y que esta circunstancia resulte acreditada en el expediente, porque otra cosa sería admitir un acto de contenido imposible, dada la inadecuación del acto a la realidad, declarándose la nulidad de la providencia de apremio, en función de lo dictado en el artículo 62.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que tipifica como actos nulos de pleno derecho los actos de contenido imposible (sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León de 14 de marzo de 2000, y de la Comunidad Valenciana de 23 de enero de 2009). En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), 106/2007, de 7 de julio, (FJ Primero), cuando afirma que “es la titularidad pasiva de una deuda la que causaliza la ejecución (...)”, de este modo, “la vía de apremio abierta contra quién no ostente la cualidad de sujeto pasivo tributario, debe calificarse como un acto de contenido imposible”, susceptible en consecuencia de anulación.

Nº REA: 34/2014

Nº RESOLUCIÓN: 125/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El reclamante manifiesta como causa oponible al apremio la falta de notificación en voluntaria de la deuda apremiada, siendo su primera noticia la notificación de la providencia de apremio. Comprobado el expediente se observa que, efectivamente no ha sido notificada la liquidación en voluntaria, siendo este motivo de oposición al apremio.

Nº REA: 126/2014

Nº RESOLUCIÓN: 131/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Tal y como se expresa en los Antecedentes de Hecho, la Resolución 116/2014 ha anulado las ** cuotas tributarias a las que se refiere la providencia de apremio impugnada en sus páginas **.

Nº REA: 37/2014

Nº RESOLUCIÓN: 132/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR.

SENTIDO: PARCIALMENTE ESTIMATORIA.

El artículo 92 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica grava la titularidad de los vehículos aptos para circular por la vías públicas, entendiéndose como tales los que hayan sido matriculados en los registros públicos correspondientes, sin haber sido dados de baja.

El artículo 8.2 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Guarda y Custodia de Vehículos en el Depósito Municipal establece a su vez que “en los supuestos en que los propietarios o titulares hubieran manifestado en forma expresa su voluntad de abandonar los vehículos, el Alcalde dispondrá de ellos en beneficio de la Administración Municipal siendo vendido en pública subasta, y su producto aplicado en primer lugar al pago de los gastos de subasta y tasas de retirada de la vía pública y custodia del vehículo, y el sobrante, si lo hubiere, ingresado sin más trámites en el Presupuesto Municipal”. La Policía Local informa de que efectivamente se renunció a la titularidad del vehículo en el año 1, aunque por cuestiones internas no se dio efectivamente de baja hasta el 5, fecha en la que el propietario reiteró su renuncia.

El artículo 167.3.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece como causa de oposición al apremio el error en el contenido de la providencia que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

Es cierto que en la documentación de tráfico consta una baja temporal a solicitud del interesado, pero no lo es menos que la entidad que según la Ordenanza asumía la titularidad del vehículo a la que se renunció en 1 y la que procede al apremio es la misma, y que la propia Policía Local da por cierta y válida la renuncia del año 1 mencionada. Si en el año 5 la renuncia implica la baja de titularidad del reclamante, lo mismo debió de suceder desde el 1, por lo que este Consejo interpreta que la emisión de la providencia de apremio se debe a un error en cuanto al titular.

De acuerdo con lo que dispone la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 96, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo periódico, que se devenga el primer día del

período impositivo. La cesión cuya realidad ha estimado este Consejo se produjo en mayo del año 1, pero el día 1 de enero de ese año era titular el reclamante, y el vehículo no se hallaba cedido.

Así pues, lo anteriormente dicho sólo cabe respecto del Impuesto sobre Vehículos del vehículo MU-5935-AS, y por los años 2, 3 y 4.

Por otra parte, nada se dice en los escritos del reclamante, ni se deduce del expediente, que implique la anulación de otros conceptos aparte de los correspondientes a los años del vehículo mencionado.

Nº REA: 25/2014

Nº RESOLUCIÓN: 143/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: APREMIO. AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Dada la fase del procedimiento en que se encuentra la actuación administrativa, notificación de la providencia de apremio, las causas de oposición admisibles en el curso de esta reclaación económica administrativa son tasadas. El artículo 167.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determina la lista cerrada de causas de oposición a la providencia de apremio. Una de ellas, la que consta en la letra c), se refiere a la falta de notificación de la liquidación. Esta es la causa que procede analizar si se ha producido en el presente caso.

Ha establecido el Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias de 26 de mayo, 2 de junio y 29 de septiembre de 2011, que la Administración debe de intentar la notificación en domicilios alternativos cuando están a su alcance sin necesidad de actuaciones de investigación muy costosas, por ejemplo, cuando la Inspección, durante el procedimiento, utilizó otros domicilios distintos al de los intentos fallidos de notificación; y que dado el carácter subsidiario y de último recurso de la notificación edictal, en tales casos no procedía. Señala el Tribunal Supremo en estas sentencias que “con carácter general, y, por lo tanto, también en el ámbito tributario, la eficacia de las notificaciones se encuentra estrechamente ligada a las circunstancias concretas del caso, lo que comporta inevitablemente un importante grado de casuismo en la materia”, y que

“los actos de notificación cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes..”, (citando la Sentencia del Tribunal Constitucional 155/1989, de 5 de octubre). Así mismo, citando otra Sentencia del Tribunal Constitucional, la 65/1999, añade: “En particular, el máximo intérprete de nuestra Constitución, subrayando el carácter *residual, subsidiario, supletorio o excepcional*, de último remedio de la notificación mediante edictos, ha señalado que tal procedimiento *sólo puede ser empleado cuando se tiene la convicción o certeza de la inutilidad de cualquier otra modalidad de citación*”. “La buena fe, sin embargo, no sólo resulta exigible

a los administrados, sino también a la Administración. En particular, esta buena fe obliga a la Administración a que, aún cuando los administrados no hayan actuado con toda la diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no designaron un domicilio a efectos de notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el indicado han sido infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante comparecencia, intente la notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo expediente, (SSTC 76/2006, de 13 de marzo, y 2/2008, de 14 de enero), bien porque su localización resulta extraordinariamente sencilla, normalmente acudiendo a oficinas o registros públicos (SSTC 135/2005, de 23 de mayo, 163/2007, de 2 de julio)”.

Otras sentencias de Tribunales Superiores de Justicia se manifiestan también en relación con a cuestión: la STSJ de Cataluña, 406/2013, de 11 de abril, manifiesta que las dudas y contradicciones acerca de las notificaciones en voluntaria implican la nulidad del apremio, y la 1050/2012, de 5 de noviembre, que en los supuestos en los que la Administración conocía otro domicilio en el que intentar la notificación, antes de iniciar el apremio, procede la invalidez de la notificación de la providencia de apremio. La STSJ de Galicia 1005/2009, de 25 de noviembre, relacionada también con un procedimiento de apremio, resolvió que cuando la Administración no puede notificar en el domicilio consignado, pero puede fácilmente acceder mediante oficinas o registros públicos a un domicilio alternativo, no procede la notificación por edictos.

En este expediente los sucesores han sido escrupulosos para declarar, entre otras cosas, los domicilios, y la ausencia de intentos de notificación alternativos puede implicar, además del devengo de conceptos económicos accesorios, el hecho de que pierdan la ocasión de impugnar, en caso de que lo consideren conveniente, sus liquidaciones.

SUSPENSIÓN.

Nº REA: 167/2013

Nº RESOLUCIÓN: 14/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: SUSPENSIÓN.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

En la reclamación se solicita la suspensión de la ejecución del acto impugnado sobre la base de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que exime al *** de la obligación de constituir depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes. La reclamación se interpone por *** al que le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 mencionado.

OTROS.

Nº REA: 74/2013

Nº RESOLUCIÓN: 60/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: OTROS. EJECUCIÓN DE FIANZA.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

La póliza de seguro de caución, no es otra cosa que un aval a primer requerimiento... esta garantía se constituye en forma solidaria con el sujeto pasivo, con expresa renuncia de los beneficios de división, orden y excusión de bienes del deudor principal, lo que evidentemente sólo tiene sentido si se trata de un afianzamiento, además de que éstas, en el presente caso se constituyeron con una validez indefinida, hasta que la administración no autorice su cancelación, lo cual determina la improcedencia de la alegación relativa al plazo de ejecución de las mismas".

La Sentencia del Tribunal supremo de 10 de noviembre de 1999 determina que "el garante no puede oponer al beneficiario que reclama el pago otras excepciones que las que deriven de la garantía misma, siendo suficiente la reclamación del beneficiario frente al garante para entender que el obligado principal no haya cumplido". Además, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1992 define esta garantía como un contrato "en el cual el fiador viene obligado a realizar el pago al beneficiario cuando éste se lo reclame, ya que la obligación de pago asumida por el garante se constituye como una obligación distinta, autónoma e independiente, de las que nacen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza".

El artículo 72 del Reglamento General de Recaudación no da entrada al garante en el procedimiento hasta que se le hace el oportuno requerimiento.

El garante es ajeno a la relación jurídica tributaria, pues su obligación de pagar nace del aval y no de la ley, por lo que no tenía que ser parte ni en el procedimiento de gestión ni en el recaudatorio, pues el requerimiento dirigido al recurrente, se ha efectuado una vez apremiada la deuda, notificada la providencia de apremio, firmes las resoluciones judiciales sobre el fondo del asunto, además de haberse efectuado previo requerimiento de pago al obligado en ejecución de sentencia, con advertencia expresa de ejecución de las garantías existentes, tal y como dispone el artículo 168 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria".

Nº REA: 132/2013

Nº RESOLUCIÓN: 66/2014.

ASUNTO: RECAUDACIÓN.

CONCEPTO: OTROS: DEUDA TRIBUTARIA: INTERESES Y RECARGOS

SENTIDO: ESTIMATORIA.

De acuerdo con lo que manifestaba el escrito del Ayuntamiento de Cartagena notificado al reclamante, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se exige en Cartagena en régimen de autoliquidación, y la presentación de la declaración no puede surtir los efectos de cumplimiento. El artículo 118.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determina que el procedimiento de gestión tributaria comienza, en los supuestos de tributos autoliquidados, mediante la autoliquidación. El artículo 89.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que aprobó el Reglamento de Gestión e Inspección tributaria establece que cuando el documento de iniciación del procedimiento tributario no reúna los requisitos exigidos por la normativa, se concederá al obligado un plazo de diez días para que subsane, y que en caso de que no se proceda en consecuencia en dicho plazo, se tendrá por desistido al solicitante. En términos análogos se manifiesta el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de procedimiento administrativo.

El fin del plazo de liquidación del Impuesto era el día de de . Antes, el día de , el reclamante solicitó la liquidación; mediante este escrito de solicitud no cumplió con la obligación de autoliquidar, (distinta de la de declarar), debido a lo cual el Ayuntamiento, el día de , le notificó la obligación de realizar autoliquidación. El hecho de que se produjera la declaración y de que el Ayuntamiento notificara la exigencia de autoliquidación el día , amplió el plazo de autoliquidación hasta, (salvo error u omisión), el día de . Hasta ese día podía haber liquidado, pero no consta en el expediente que lo hiciera. Sí consta, sin embargo, una liquidación administrativa notificada el día de .

El Ayuntamiento ha impuesto un recargo por declaración o autoliquidación extemporánea de los contemplados en el artículo 27 de la Ley General Tributaria, y ha dado el mismo tratamiento a un acto incorrecto de declaración en plazo que el que procede para un acto correcto de autoliquidación fuera de plazo, pero la ley es taxativa cuando establece las causas que legitiman el devengo de los recargos: presentación de declaraciones o autoliquidaciones fuera de plazo sin requerimiento previo, y esas causas no se dan en el presente expediente, por lo que procede la anulación de dicho recargo. Como el devengo del recargo en el plazo en que se aplicó, excluye el devengo de intereses de demora, la anulación de éste legitima para su cálculo y exigencia.

REVISIÓN

TRAMITACIÓN.

Nº REA: 176/2013

Nº RESOLUCIÓN: 121/2014.

ASUNTO: REVISIÓN.

CONCEPTO: TRAMITACIÓN.

SENTIDO: PARCIALMENTE ESTIMATORIA.

Si a la vista de la información extraída de los expedientes administrativos se aprecian importantes defectos formales que pudieran haber disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, resulta, en consecuencia, nulas las actuaciones de liquidación, en voluntaria y en ejecutiva, hasta ahora realizadas, debiéndose retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal, conforme a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria.

PRESCRIPCIÓN.

Nº REA: 10/2014

Nº RESOLUCIÓN: 73/2014.

ASUNTO: REVISIÓN. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

CONCEPTO: PRESCRIPCIÓN.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El Decreto de desestima la solicitud de devolución de 2009 sobre la base de que cuando se realizó la solicitud, el de de , habían transcurrido más de cuatro años desde el fin del plazo de ingreso voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2009.

El artículo 66.c de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT), establece que el plazo para dicha solicitud es de cuatro años, y el 67.1 que dicho plazo comienza a contarse desde el día siguiente a la realización del ingreso indebido. En este caso parece claro que se ha producido un doble ingreso, sin causa y en vulneración del principio de capacidad económica, que ha de regir la interpretación de las normas tributarias. De acuerdo con lo anterior, hasta el día de de 2013 se había realizado un pago por tercero de la deuda tributaria, perfectamente admisible por el ordenamiento; es ese día, cuando se ingresa por segunda vez la cuota de 2009, cuando se produce un exceso entre lo legítimamente exigible y lo efectivamente ingresado, y ese es el día, puesto que la Ley General Tributaria no determina nada en cuanto a quién debe de ser quien realice el ingreso indebido, que ha de servir de base para el cómputo del plazo de prescripción. De esta forma, el pago por segunda vez de la cuota de 2009 inicia el cómputo del plazo de prescripción para solicitar la devolución por el antiguo pagador. Y esto tanto más en la medida en que el propio Ayuntamiento conocía la titularidad del nuevo propietario, dado que, según se manifiesta en el escrito de la reclamación, parece ser que se liquidó el Impuesto sobre el

Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana correspondiente con ocasión de la transmisión, y en la medida en que el Ayuntamiento dictó providencia de apremio contra el nuevo propietario, con lo que tuvo a éste por el realmente obligado desde 2013.

SUSPENSIÓN.

Nº REA: 112/2014

Nº RESOLUCIÓN: 136/2014.

ASUNTO: REVISIÓN.

CONCEPTO: SUSPENSIÓN. ERROR MATERIAL ARITMÉTICO O DE HECHO.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

Del texto de la liquidación no se desprende ninguna información que pueda hacer pensar que el Ayuntamiento de Cartagena ha liquidado atribuyendo un valor del **, *% de la base al Impuesto por alguna razón jurídica concreta; ante esta razón, y dado que no se conocen los argumentos que hacen concluir en la cifra utilizada por el Ayuntamiento, este Consejo estima que es posible que se haya producido un error material, de cálculo o de hecho.

Establece el artículo 233.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que “se podrá suspender la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho”.

OTROS.

Nº REA: 175/2013

Nº RESOLUCIÓN: 123/2014.

ASUNTO: REVISIÓN.

CONCEPTO: OTROS. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

SENTIDO: DESESTIMATORIA.

La reclamante solicita que se dé por doblemente ingresada la sanción referida al Polígono 1, que se anule la providencia de apremio mencionada y que se devuelva el exceso ingresado. Sin embargo, a pesar de las actuaciones llevadas a cabo por este Consejo, resulta que ni de los datos y escuetas explicaciones que se hacen en la reclamación, ni de los expedientes e informes solicitados se deduce tal doble ingreso. No se deduce del expediente que se haya ingresado por dos veces un mismo concepto sancionador, (el referido al recibo A, por infracción ambiental en el Polígono 1. El pago del día X de X de X, por €, se hace mediante transferencia en la que la reclamante alude a una infracción en el Polígono Industrial 2, no 1. Es más: la transferencia del día X de X hace constar como referencia, simplemente, el concepto B, no A).

síkkki0 ha podido establecerse, sin embargo, que la transferencia del X de X de X se aplicó a contabilidad, pero no que suponga doble ingreso alguno.

OTROS.

Nº REA: 73/2013

Nº RESOLUCIÓN: 25/2014.

ASUNTO: OTROS. DEUDA TRIBUTARIA.

CONCEPTO: OTROS. INTERESES. CÓMPUTO.

SENTIDO: ESTIMATORIA.

El artículo 26.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que el interés de demora será exigible durante el tiempo a que se extienda el retraso del obligado. Y la Ordenanza vigente para cada uno de los ejercicios regularizados establece como plazo de ingreso el comprendido entre el 1 de septiembre y el 20 de noviembre.

La regularización de cuotas llevada a cabo por la Inspección era inmediatamente exigible, de acuerdo con los plazos establecidos por la ley para el caso de liquidaciones llevadas a cabo por la Administración. Ahora bien: el interés es un concepto indemnizatorio, y aunque es también inmediatamente exigible, no se cuantifica con arreglo a los mismos criterios que las cuotas. En lo que se refiere al cálculo del interés de demora hay que tener en cuenta el desfase existente entre la fecha en la que el sujeto debía de haber ingresado en condiciones normales y la fecha de ingreso efectivo, con independencia del período impositivo y del devengo, y tomando como fecha de cómputo la del siguiente al último día de ingreso en plazo voluntario.